

NUEVOS PROLEGÓMENOS EN TORNO A LA REALIDAD SOCIAL, POLÍTICA Y ECONÓMICA DE MÉXICO

Jorge Isauro Rionda Ramírez¹
León, Guanajuato; a 15 de Agosto de 2011
En memoria de los justos

INDICE

INTRODUCCIÓN.

PRIMERA PARTE: NEOLIBERALISMO, ORIGEN Y OCASO.

- MODERADOS Y RADICALES
- ORÍGENES DEL OCASO ESTADOUNIDENSE
- DEMOCRACIA DE LIBRE COMERCIO
- PAN, IGLESIA Y MODERNIDAD
- CORRUPCIÓN, NEOLIBERALISMO Y MAL GOBIERNO
- GOBIERNOS NEOLIBERALES EN MÉXICO
- NEOCORRUPCIÓN EN EL GOBIERNO DEL CAMBIO
- COMICIOS, SUCESIONES Y CONCERTACIONES DESDE LA DERECHA
- ELECCIONES DE ESTADO
- ULTRASALINISMO Y NEOPORFIRISMO COMO EXPRESIÓN DEL NEOLIBERALISMO
- LIBERALISMO AUTORITARIO

SEGUNDA PARTE: FASCISMO DE ESTADO (ESTADO FALLIDO Y DE EXCEPCIÓN).

- ESTADO DE EXCEPCIÓN
- NARCO, CRIMEN Y NEOLIBERALISMO
- PREBENDAS POSELECTORALES AL 2006
- LEY DEL ISSSTE Y SEGURIDAD SOCIAL
- TERRORISMO DE ESTADO
- CAMPO, AGRARISMO, RURALIDAD Y POBREZA
- LA IZQUIERDA EN MÉXICO
- REFORMA ENERGÉTICA, SOBERANÍA Y CRISIS
- FASCISMO Y PRIVATIZACIONES
- MUERTE, TERROR Y ESTADO
- MÓVILES SATÁNICOS
- CRISIS ECONÓMICA ACTUAL EN MÉXICO
- VULNERABILIDAD Y SALUD, COSTO NEOLIBERAL
- DE IZQUIERDA A DERECHA, EL SUFRAGIO DEL PODER
- FISCO, ELECCIONES Y EQUIDAD DISTRIBUTIVA
- DE ADVERSIDAD, SINIETROS Y DESAVENIENCIAS
- FE, CONVICCIONES, FUNDAMENTOS Y CONVENIENCIAS
- SOBERANÍA, NACIÓN Y DESARROLLO

CONCLUSIONES

FUENTES

¹ Profesor investigador de tiempo completo titular “A” de la Universidad de Guanajuato, campus León. División de Ciencias Sociales y Humanidades. Departamento de gestión pública y desarrollo. Profesor de posgrado de la Universidad de Guanajuato, campus Guanajuato. Dirección de gestión y dirección de empresas. División de Ciencias Económico Administrativas. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (nivel 1) CONACY. Profesor con perfil preferente PROMEP – SEP. Director de la revista especializada en la economía y la sociedad mexicana Tecsistécatl. Correo electrónico: riondaji@hotmail.com

INTRODUCCIÓN.

El recuento de la vida nacional indica problemas propios de una nueva lógica de acumulación del capital. La misma que se basa en el régimen de producción flexible. En este caso para un desarrollo capitalista periférico, dependiente e incipiente, como es el caso de la economía mexicana.

El presente libro electrónico tiene por finalidad presentar consideraciones en torno a las disrupciones sociales, conflictos nacionales y grandes contradicciones existentes tanto en la economía, la sociedad y la política mexicana, de tal manera que el lector tenga un buen diagnóstico reflexivo y evaluativo de la realidad que se vive en el país a inicios del nuevo milenio.

La cuestión de interés en ello es dejar en claro que el capitalismo se vale de toda forma técnica en su reproducción y aprovecha al máximo y con gran eficiencia los medios que le permiten mantener su acumulación, por lo que en lo sostenible es concebible como un esquema exitoso, no obstante cuestionable en materia de sustentabilidad social, económica, política, cultural y ecológica. La pregunta fundamental radica en saber si ¿es posible y viable hacer de lo sostenible sustentable en la lógica del esquema capitalista posmoderno, en especial en el área del desarrollo capitalista periférico, que expresa problemas aún más críticos y costosos que los que se dan en la geografía central?

Se supone que las contradicciones del sistema se recrudecen y profundizan a niveles inconciliables y salvables, lo que tarde o temprano ocasiona no tanto una disrupción, porque de ello hay muchas, sino una ruptura del esquema capitalista fundamental. Lo que lleva necesariamente a un nuevo esquema, que no necesariamente es la vía socialista, tal como lo sostienen los amantes de la teoría marxista, sino posiblemente, tal como lo propone Giddens una tercera vía, bien socialdemócrata, bien hacia el comunismo, bien a una economía más indígena, autóctona, porque no, hacia un nuevo esquema capitalista con carácter más social... o hacia algo realmente nuevo.

El libro no llega a plantear soluciones en sí con base al propio esquema. Cuestiona tan solo las vicisitudes en que se expresan los grandes temas de la sociedad, la economía y la política mexicana y propone consideraciones a las mismas, bien soluciones específicas. No obstante pone de manifiesto lo cuestionable de la sostenibilidad ante la necesidad de lo sustentable, por caso México, y las expresiones de la crisis, que bien da inicios de la proximidad de la ruptura aquí mencionada.

En ello, bien se vale el pensamiento intuitivo y la deducción lógica, como método para construir el saber y establecer como método el ensayo al respecto de las consideradas de cada problema aquí planteado.

Su alcance queda en manos de los lectores, quienes de lo aquí expuesto tienen la posibilidad de llevarlo a otras dimensiones, consideraciones y problemas, desde puntos de vista diversos e incluso contrarios. Lo importante es abrir la polémica que nutre la discusión reflexiva, pero sobre todo engendra nuevo saber y plantea soluciones genuinas, pertinentes y novedosas a los grandes temas de la sociedad, la economía y la política del país.

PRIMERA PARTE: NEOLIBERALISMO, ORIGEN Y OCASO.

MODERADOS Y RADICALES

En México, las tres grandes disrupciones sociales de su historia moderna son la guerra de independencia, la guerra de Reforma y la revolución mexicana. En ellas se debaten dos posturas fundamentales para el futuro de la nación: la conservadora o fomentista y la liberal o reformista.

Quienes quieren de un lado inventar a México desean un conservadurismo nacionalista de corte centralista y endogenista, que discrepa del reformismo liberal federalista y basado en un esquema exogenista.

Las fuerzas internas conservadoras están encabezadas principalmente por la Iglesia católica, que trata de controlar a la sociedad civil mediante cofradías de tipo masónico

(del rito escocés), donde destaca el MURO y el YUNQUE. Todos ellos pertenecientes a una derecha extremista mexicana del tipo de la democracia cristiana.

Por otro lado, las fuerzas liberales reformistas las encabezan intelectuales mexicanos, empresarios mexicanos como del extranjero (especialmente norteamericanos), y grupos de corte social demócrata. Finalmente de derecha moderada.

En México movimientos sociales de tipo socialista no los hay de importancia, destaca la creación del Partido Comunista Mexicano, creado en 1919, efecto del esfuerzo bolchevique en el país por darle a la revuelta iniciada en 1910 un sesgo socialista. Este partido prescribe en 1949, puesto que en la post guerra todo lo que pintara como comunismo en América latina es mal visto por los norteamericanos. Para no incomodar a los vecinos del norte el Estado mexicano proscribió este partido.

Es de hecho en 1946, al término de la segunda contienda mundial que el entonces partido oficial, el PRI, bajo la administración de Miguel Alemán, que el toque socialdemócrata que le caracterizó como partido de la revolución mexicana se va volviendo historia. El PRI se vuelve un partido pro empresarial y de derecha moderada.

Ante su persistente permanencia como partido en el poder, la corrupción va carcomiendo sus bases de fundamentación como estado de derecho. Abiertamente se vuelve un Estado fascista. Fraudes electorales, autarquías de todo tipo y en todo orden son la vivencia diaria del gobierno mexicano para su pueblo.

Desde dentro del partido nacen iniciativas tratando de rescatar de los vicios del Gobierno al PRI, como es la corriente democratizadora encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, que terminará por renunciar al partido y formar, junto con Muñoz Ledo, el PRD. Mismo que siendo de 1988 al 2006 la principal vanguardia política de la izquierda en México, es boicoteada por el presidente actual, Felipe Calderón Hinojosa, imponiendo a “los chuchos”, cuya consigna es buscar alianzas ¡con la derecha! Llámese PAN.

Ahora la izquierda tiene que buscar y fortalecer nuevos frentes, el Partido del trabajo, como Alianza, son dos nuevos bastiones. No obstante, el principal caudillo de la

izquierda, Andrés Manuel López Obrador, debe levantar la izquierda mexicana desmoronada y debilitada para los comicios del 2012. Tarea sumamente difícil. Solo tiene a su favor que su discurso político es legítimo ante la realidad social, política y económica de la nación.

ORÍGENES DEL OCASO ESTADOUNIDENSE

En 1971 – 1973 se dan 2 crisis importantes del capitalismo: la del patrón de cambios basado en la convertibilidad del dólar al oro (tipo de cambio oro – dólar), y la de los precios internacionales del petróleo causado por la 4ª guerra árabe – israelí.

Estas dos crisis marcan el inicio del ocaso estadounidense. Dueños de la economía mundial, su hegemonía abraza el 60% de ésta. A partir de la crisis van perdiendo influencia. En 1960 aparece Japón reconstruido, fortalecido y con gran pujanza comercial y financiera, que resta mercados internacionales a las empresas norteamericanas, como invade sus propios mercados. En ese mismo año se forma la Comunidad Económica Europea, como una estrategia contra estadounidense para aminorar su peso económico en la región, y con una abierta política de sustitución de importaciones norteamericanas.

Para colmo la Organización de países exportadores de petróleo (OPEP) nace en 1960, cuestión que pone a todo occidente y su crecimiento a temblar ante la posible alza del crudo por esta organización que controla el 80% de las reservas mundiales del llamado oro negro.

Puede por tanto afirmarse que si bien en Japón la toyotización se inicia durante el segundo lustro de los años 30 del siglo XX, tres décadas después está llevando a la crisis a la modernidad occidental, junto con el esquema de producción rígido, también conocido como fordista, taylorista o moderno.

La pérdida gradual de ventas estadounidenses en el extranjero que desde 1960 experimenta el vecino del norte, le llevan a la gradual disminución de existencia de oro en el fuerte Nox. Sus reservas del metal amarillo disminuyen al grado que en 1971,

Francia entrega sus existencias en dólares dadas en sus reservas a la reserva federal norteamericana y exige su equivalente en oro. Es cuando se vela que Estados Unidos de América no tiene las reservas suficientes en oro (dada la paridad del momento de \$25 por onza), para sostener su estabilidad cambiaria. Inicia la crisis que pronto repercute a escala mundial.

Mientras Norteamérica deja de vender, a México le deja de comprar. Vía balanza comercial, la crisis estadounidense es paulatinamente transmitida a México ante el creciente déficit comercial que desde 1971 se experimenta, siendo entonces que el 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino la Unión Americana. Las reservas internacionales pronto bajan al grado que para 1976 causan una devaluación de casi el 100% de la paridad del peso ante el dólar (entonces de \$12.50 a \$24.25). Termina el milagro mexicano, el crecimiento sostenido por más de 3 décadas de abrupto se paraliza e inicia para nuestra nación una espiral de devaluaciones y endeudamientos que llegan a dimensiones nunca tenidas.

Para 1976, año en que inicia la crisis, México descubre uno de los principales yacimientos de petróleo en el mundo: el complejo Cantarell. Situación que si bien en el momento pudo ser una excelente noticia, el mal manejo de los recursos petroleros y la petrolización de la economía mexicana, especialmente para las finanzas públicas que dependieron hasta de un 60% de los ingresos que causa el hidrocarburo, es otro elemento que nutre el endeudamiento creciente y excesivo de la economía nacional, que para el sexenio de José López Portillo llega a excesos que llevarán a una nueva crisis a la economía del país para 1983. Crisis recurrente para 1987.

El término de la guerra fría en 1989 con el desplome de la Unión Soviética, da inicio a una nueva división y especialización internacional del trabajo y la producción en un nuevo orden económico internacional, ahora regido principalmente por el capitalismo.

El desarrollo regional se dimensiona a nuevas áreas de cooperación. Multilateralismo y librecambismo hacia dentro de las mismas, mientras que priva el proteccionismo y el bilateralismo entre ellas. En el mercado de capitales la unilateralidad de los acreedores y la bilateralidad con que se llevan los tratados llevados por los organismos multilaterales

tales como el FMI y el BM, dejan en claro que la visión los problemas del mundo en desarrollo como el desarrollado se ven con gafas distintas.

Se empieza a hablar de globalización, y se retoma aquella vieja tesis de 1823 de la doctrina Monroe: América para los norteamericanos. Nace en esta tónica la llamada iniciativa de las Américas, liderada por G. Bush (padre), y que es parte de la renegociación de las deudas latinoamericanas que representa el plan Brady.

Se rescatan las tesis de la posguerra de Friedrich Hayek y de los años 60 del matrimonio Friedman para conformar las tesis del neoliberalismo. Un estado mínimo y la supremacía de las fuerzas del mercado son el sustento de sus trabajos. Contra el keynesianismo de los años 30 a inicios de los 70 son sus principales apuntalamientos teórico – éticos para la administración pública. Consideran que los subsidios y subvenciones, así como un exceso de regulaciones son la principal causa del ocaso estadounidense, e imitando el modelo nipón de la producción flexible, inician una reestructuración económica en latinoamérica, acompañada de una serie de reformas institucionales propias para permitir que la región se abra a la inversión extranjera, en lo más posible, aún en los considerados renglones estratégicos de sus economías, a cambio de un aligeramiento de sus cargas financieras por deuda con el exterior, y la creación de fuentes de trabajo en sus territorios a efecto de la penetración de capitales foráneos a sus economías.

Estados Unidos de América colocaría en las geografías ibero americanas sus factorías logrando escalas de producción con menores costos, y la región obtendría generación de empleos y mejoras en los mercados nacionales ante una mayor concurrencia de mercancías. La panacea radica en el Consenso de Washington para todo el continente... incluso el mundo!

DEMOCRACIA DE LIBRE COMERCIO

El fascismo es un régimen cuya principal característica es ser lo contrario a la democracia. De alguna manera es la autocracia que un grupo o partido político establece

para imponer su interés sobre el derecho del pueblo. Puede ser de corte militar o bien, tratarse de una dictadura de partido, al estilo del PRI por casi 71 años (1930 – 2000).

La democracia siendo un régimen donde las decisiones son una toma que se da mediante una representación de poderes y niveles de gobierno del tipo republicano y federal, el pueblo decide por sí, para sí siendo que el Estado es del pueblo. No obstante, los intereses representados por los congresistas tienden a dirimir en querellas fuertes y querellas, especialmente entre partidos políticos. Las reformas demandadas por la sociedad entran en procesos de negociación alentados y envilecidos. Mientras la reestructuración económica sigue el curso de la dinámica de los mercados, las reformas institucionales se ven lentas y prematuramente obsoletas.

Contrario, el fascismo permite como fórmula de dictadura dediciones ágiles y ordenadas a los intereses (no del pueblo) de grupos. Es altamente efectiva para gestar reformas institucionales rápidas y pertinentes en oportunidad. No obstante, alineadas a grupos plutocráticos o a intereses derivados de fórmulas plutonómicas (no se diga los monopolios).

El fascismo en América latina prospera durante todo el siglo XX, muy asesorado por la agencia norteamericana CIA que boicoteó durante la centuria todas las democracias de la región. En México el fascismo, sin negar en los años 60 y 70 el gran influjo de los intereses estadounidenses en los círculos de poder mexicano, prospera bajo intereses más nacionales. Es el PRI quien arma una “dictadura benévola” y logra bajo esta fórmula un Estado bajo paz y orden, con disciplina, incluyente y convergente, al menos durante el periodo del desarrollismo (1940 – 1976).

El agotamiento del esquema endogenista (como también se le da a llamar al desarrollismo), a efecto del ascenso de la toyotización y de la recuperación de las economías europeas después de la segunda contienda mundial, el orden posrevolucionario en México ve su ocaso. La nación mexicana entra en una espiral de devaluaciones y endeudamiento progresivo a razón de la caída de sus ventas al exterior, que van a mermar las reservas internacionales del país llevándolo a una abierta crisis económica a partir de 1976.

El término de la guerra fría a efecto la caída de las economías socialistas del este europeo, abre en América latina un espacio donde Washington debe tomar un nuevo consenso en razón de cooperación e integración económica. Es desde la década de los años 80 de la centuria pasada que la Unión Americana impulsa en la región las llamadas “democracias de libre comercio”. Es Carlos Salinas de Gortari quien busca bajo esta consigna crear un ambiente político democrático que haga contrapeso al régimen fascista que se mantiene en su momento por el PRI. Para ello reinventa al PAN, no como un partido de la iniciativa nacionalista como lo inspira su creador Manuel Gómez Morín a fines de los años 30 del siglo XX, sino ahora con un dejo de alianza entre los sectores más conservadores del país, la gran empresa nacional y los intereses transnacionales, especialmente estadounidenses. Bajo dicha alianza cívica prospera la derecha mexicana, ya no bajo la tónica de un gobierno de corte social demócrata posrevolucionario, sino de democracia cristiana posmodernista.

Este gobierno cree en la capacidad de regulación de las fuerzas del mercado, y su propuesta parte de principios muy elementales: darle facilidades a la iniciativa para que crezca y prospere, guerra contra el trabajo, congelando salarios y desmantelando a la organización obrera y sus fórmulas de corporativismo estatal. Apertura económica. Venta de paraestatales para lograr un estado menos propietario... y benefactor y entregar a manos del capital mucha de la infraestructura productiva que controlaba el estado.

Los neoliberales sostienen que el libre comercio es uno de los baluartes necesarios para garantizar la democracia. En un entorno de apertura económica, los intereses políticos giran en torno a la búsqueda de una representación popular basada en la democracia y la libertad, y viceversa. Los intereses políticos liberales promueven un ambiente de inversión abierto. Con ello se crea un círculo virtuoso.

Irónicamente, el neoliberalismo en el país no se sustenta bajo una auténtica democracia basada en el libre comercio, sino mediante el fraude electoral, el de 1988 y el de 2006. ¿Será que también el libre comercio se ve viciado por la falta de democracia en el país? Creando más bien un círculo vicioso y corrupto.

PAN, IGLESIA Y MODERNIDAD

El neoliberalismo arriba al país desde la administración de Miguel De La Madrid Hurtado (1982 – 1988). No obstante, las iniciativas son modestas y más allá de la adhesión al GATT (Acuerdo general sobre comercio y aranceles aduaneros) en 1986, realmente la aceptación a la nueva ética de gobierno que esta corriente ideológica implica es mesurada.

Es realmente con Carlos Salinas de Gortari (1988 – 1994), que se lleva a cabo y con profundidad el neoliberalismo, al menos desde el ámbito de la economía. Da inicio a reformas sustanciales para orientar como bien amparar la reestructuración económica posfordista que se viene dando en la economía nacional, como parte del desarrollo de un capitalismo periférico.

Deja de lado el pacto constitucional para dar paso al pacto de solidaridad, el cual era sujeto de negociación cada seis meses con las cámaras empresariales y sectores de la economía de campesinos, obreros y demás trabajadores mediante la intervención de la Secretaría del Trabajo y la entonces Secretaría de Comercio y Finanzas (SECOFI).

El partido de acción nacional (PAN), bajo la tradición nacionalista de Manuel Gómez Morín, que para entonces encabeza Manuel de Jesús Clouthier de Rincón (Maquío), es una oferta política que si bien es una derecha moderada, no es aquella oferta política que busca Carlos Salinas de Gortari en su Adán de establecer como partido oficial a uno ad hoc a los intereses de transnacionalización de los norteamericanos. Desde luego la reticencia viene de la cúpula de gobierno de los directivos del partido. Muere entonces el 01 de octubre de 1989 Maquío presado a efecto de un accidente vehicular y cuya muerte de da en un momento muy oportuno para los intereses del entonces ejecutivo nacional.

Arriba a la cúpula del PAN Diego Fernández de Ceballos, quien a cambio de ciertos terrenos en Acapulco (Guerrero), se presta para reconfigurar el partido a los intereses salinistas y con ello formular la alianza cívica entre la iglesia católica y los grupos sociales más conservadores y reaccionarios del país, la gran empresa mexicana y los Estados Unidos de América para llevar “sacar al PRI de Los Pinos”.

Hay que dar fin a la socialdemocracia forjada a raíz de la revolución mexicana y fortalecida durante 70 años de gobiernos posrevolucionarios, para dar cabida a la corriente de la democracia cristiana encabezada por el PAN. Una concesión importante en esta alianza se da al respecto de reformar el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1990). Lo principal es que le abren al Clero la posibilidad de abrir planteles educativos en todos los niveles y en todo el territorio nacional, donde la matrícula le representa un jugoso ingreso. Desde entonces el crecimiento y mejora de la educación pública en México es frenado en pro de favorecer el crecimiento de la educación privada en el país, especialmente aquellos que son propiedad de las órdenes religiosas. Es entonces que la educación es la primera sacrificada en aras de echar a andar el neoliberalismo. La apertura educativa y las reformas al artículo 3ro. como al 130 constitucional no van en razón de una mayor libertad en la educación, menos aún de su democratización y secularización, sino todo lo contrario, a su elitización, donde la exclusión y la marginación de los sectores populares más humildes son los directamente perjudicados. No solo prospera la educación privada en México, sino su evangelización y a la par la marginación. Y sobre todo la educación deja de ser un precepto del desarrollo nacional para pasar a ser un negocio de particulares. Abajo la conciencia y la cultura, solo interesa la instrucción y la capacitación. La certificación educativa ahora solo considera aquellos aspectos que indiquen desempeño laboral mas no impacto social.

Una alianza cívica que tiene que negociar con las instituciones estamentales propias del siglo XVI, para poder llevar la posmodernidad en cuanto sus reformas. Más que un retroceso, una reivindicación de la herencia colonial de México aún en nuestros días. Ese lastre tan pesado que es en gran medida una de las principales causas de rezago nacional.

CORRUPCIÓN, NEOLIBERALISMO Y MAL GOBIERNO

La respuesta social contra el neoliberalismo en México se expresa el 1º. de enero de 1994 con el alzamiento de comunidades indígenas zapatistas en Chiapas, encabezado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Esgrimen sus integrantes

como baluarte “Nunca más un México sin nosotros” y “Para nosotros nada. Para todos, todo”.

El sexenio salinista da inicio a reformas institucionales sustanciales en la carta magna, premiando a grupos sociales y políticos que se alinean a la lógica de una administración pública de corte abiertamente neoliberal. La promesa de que un tratado de libre comercio con América del norte sacaría del subdesarrollo a la nación mexicana, no es del todo admisible, especialmente para aquella población que depende de los sectores económicos más tradicionales y nacionales del país, especialmente aquellos del campo.

Son precisamente los trabajadores de actividades económicas propias del sector primario, quienes van a resentir de manera más cruda las inconsistencias y miopías de las políticas neoliberales.

El desmantelamiento del Estado de bienestar instaurado desde los años 30 de la centuria pasada bajo la lógica de las administraciones socialdemócratas, endogenistas y propias del desarrollismo, para en seco subsidios y subvenciones a la población trabajadora, en especial campesinos rurales y obreros urbanos. Algunos tan sensibles que causan un enorme éxodo de trabajadores mexicanos al extranjero, especialmente hacia el vecino del norte. Como también generan la prosperidad de la llamada economía subterránea, más que ilegal, informal y corrupta.

El narcotráfico escala niveles nunca antes vistos como parte del crimen organizado desde 1991, con la suspensión de los subsidios al campo. Es de hecho el narcotráfico en su expresión como anatema de la actualidad un efecto inminente de las políticas neoliberales aplicadas a toda América latina desde los años 90 del siglo XX, sin negar que este problema ya existen desde un siglo anterior, pero en dimensiones mucho más modestas, y sobre todo controlables.

La población más vulnerable de las políticas neoliberales en el país es precisamente la población de más bajo nivel de ingreso. La exclusión es un efecto inminente de este grupo de personas y es por ello que los índices de marginación vienen a crecer conforme se cancela el programa social del asistencia del gobierno y desmantela el Estado de bienestar mediante la venta de más de dos mil paraestatales. Algunas de ellas

gigantescas e importantes como son puertos nacionales, ferrocarriles nacionales, teléfonos de México, aerolíneas, carreteras ... ¡hasta las pensiones! (Afores).

Para promover la iniciativa, las regulaciones estatales son laxadas de forma que llaman a la corrupción y la permiten. Se confabulan intereses políticos con intereses empresariales y de mercado dando inicio a lo que se da a llamar “el capitalismo salvaje”, el cual prospera bajo el amparo de las administraciones de Carlos Salinas de Gortari (1988 – 1994), como de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994 – 2000).

La peor crisis económica que vive la nación a fines del siglo XX se da en 1994. Misma que tiene relación con un mal gobierno que pierde el control de la economía de la manera más absurda y a 20 días de haber iniciado un nuevo sexenio (el de Zedillo). Ante el Pacto de Solidaridad, el entonces Secretario de la SECOFI, Serra Puche, modifica precios de básicos sin consultar a los sectores que integran dicho pacto. El efecto es el terror y la fuga de capitales que de inmediato desploma el tipo cambiario entre el peso y el dólar.

Peor cuestión es que el Gobierno, en aras de rescatar la economía nacional, hace uso del Fondo Bancario de Protección al Ahorro para salvar los bancos de unos cuantos empresarios que ante el “río revuelto...” usaron recursos para “sacarle jugo a la crisis”... ¡con los recursos del pueblo de México! Más de 100 mil millones de dólares representan los recursos este nuevo adeudo para los mexicanos (entonces la deuda nacional al extranjero es de 120 mil millones de dólares).

GOBIERNOS NEOLIBERALES EN MÉXICO

El neoliberalismo da libertad a los empresarios para que emprendan nuevos y fructíferos negocios. Desregula la economía y laxa la fiscalización de las mismas, especialmente en materia laboral como ecológica.

En este régimen, la ultraderecha es sustancialmente fortalecida. Si bien se admite que la izquierda es conflictiva, la derecha resulta en tanto mafiosa. Véase el ascenso del YUNQUE, el MURO y otras tantas organizaciones secretas que trabajan como parte del

crimen organizado pero desde las esferas del poder, corrompiendo, robando, excluyendo, perjudicando, matando a quienes estorben en sus corruptos intereses.

El PRI siendo un partido que favorece a los empresarios, no obstante su permanencia en el gobierno por décadas le desgasta al grado que pierde legitimidad. Por otra parte, es un partido que nace de una revolución popular social demócrata y sus lineamientos e ideales son precisamente de este corte. No es para los intereses norteamericanos en el país un partido propio para el nuevo régimen económico que desena inventar en el país. Es por ello que la consigan en 1988, ante el fraude electoral, para su nuevo agente en el gobierno, Carlos Salinas de Gortari, es dismantelar el Estado de bienestar generado desde los años 30 del siglo XX y fortalecido por el régimen priísta post revolucionario.

El PAN es entonces la alternativa de partido que, por una parte, se deslinda de la herencia de la revolución mexicana, y libre de este atavismo ideológico, se presenta como una oferta política pro empresarial, pragmática y acorde a la nueva realidad económica de apertura, cooperación e integración al espacio económico norteamericano.

Irónicamente, el PAN arriba al poder en el año 2000 pero soportado por la plataforma corporativa del PRI: los sindicatos, confederaciones nacionales populares, cámaras empresariales y otras más fórmulas de corporativismo. Que aunque debilitadas por la desaparición de la cláusula de exclusión existente en la Ley Federal del Trabajo en 1991, aún existentes y persistentes como fórmulas de control y poder político. Es por ello que se dice que el PRI solo ha prestado la silla presidencial al PAN y que en una especie de maximato, el PAN juega a ser una “cortina de humo” que oculta a quienes auténticamente siguen tras el poder: las hegemonías empresariales.

Si bien Miguel De La Madrid Hurtado abre espacios de gobierno para echar a andar políticas pro empresariales, es sin embargo precavido en adoptar el neoliberalismo abiertamente. Es Carlos Salinas de Gortari quien toma de lleno la batuta para iniciar reformas institucionales profundas y radicales que sean acordes a la reestructuración económica de corte posfordista que desde los años 80 de la centuria pasada se inicia.

Ernesto Zedillo Ponce De León admite el neoliberalismo económico salinista y le da consecución. Más retomando el neoliberalismo social trata de echar a andar el neoliberalismo político bajo la vanguardia panista y lo culmina con el ascenso al poder de Vicente Fox Quezada, un personaje político con un discurso coqueto que bien habla como un social demócrata ante las clases trabajadoras, y bien como un demócrata cristiano ante la clase empresarial y grupos conservadores del país. Pero que finalmente trabaja en razón de los intereses del grupo plutocrático que rige a la economía mexicana.

Vicente Fox Quezada es el presidente que más emblema los intereses de los grupos reaccionarios y conservadores del país. Especialmente los de la Iglesia católica mexicana y los de los grupos empresariales nacionales. Deja un poco de lado a los intereses norteamericanos y trabajo por una economía abierta, sí, en pro de la empresa nacional. Lo que desilusiona a los norteamericanos y quienes descubre que su agente en México no les es tan leal y resulta veleidoso con respecto a las iniciativas que desean promueva como parte de su política para el país. La derecha nacionalista propia de provincia y los intereses de la empresa de provincia en Los Pinos son la mella de su estilo de gobierno.

La alianza cívica lograda por el PAN desde la regencia de Diego Fernández De Cevallos entre Iglesia, empresa mexicana y empresa transnacional, es plataforma para que se arme el programa de gobierno de Vicente Fox Quezada, quien no obstante trae sus propios compromisos gracias a las herencias de “Amigos de Fox”, que es la forma en que el vende su campaña. Según la PGR entre el 15% y 20% de los fondos obtenidos son foráneos y el resto lo aportaron los nacionales.

Si bien ya no hay pacto social en el país desde tiempos salinistas, con Vicente Fox éste parece renovarse. Prometió dos cosas: sacar al PRI de Los Pinos y un gobierno del cambio. Ambas promesas son cumplidas pero con ello logra la continuidad de un régimen que requiere un cambio de piel para sostenerse, prosigue con las reformas neoliberales que ahora ven hacia el neoliberalismo social, pero no el concebido por Salinas de Gortari, sino uno dirigido a reformas la legislación laboral y la seguridad social. Asimismo, se prosigue con el desmantelamiento del Estado de bienestar. Afirma un proverbio: “Que todo cambie para que todo permanezca”. Ese es la razón histórica

de este sexenio que abre una nueva fórmula de gobierno fascista en el país: el de la plutocracia.

El desvanecimiento de un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, el apartamiento del gobierno de la realidad social del país y su desatención a las demandas sociales, la generalización de la impunidad y la corrupción, como la proliferación de la insurgencia, la delincuencia, el desorden y la pérdida de la paz social, obligan a heredar el aparato de gobierno a una administración civil que se ampare en la acción del Ejército Nacional. Un estado represivo, punitivo, militarizado al estilo de Augusto Pinochet, pero miope e ineficaz para llevar a cabo reformas económicas pertinentes y con un gran costo social hasta ahora absurdo... millares de ejecuciones y la aparición del terror como vicisitud nacional.

NEOCORRUPCIÓN EN EL GOBIERNO DEL CAMBIO

La corrupción en el nuevo régimen de ultraderecha se expresa mediante la elitización de la misma. Se habla de abusos a costa del poder y negocios a expensas del erario público.

Destacan en el 2002 los negocios tras el poder del entonces senador queretano Diego Fernández de Cevallos que valiéndose de su posición como en el Senado de la República, le gana un litigio a la Secretaría de la Reforma Agraria por un monto superior al propio presupuesto anual de la propia secretaría. Litigio multimillonario (mil 214 millones 174 mil 40 pesos). El litigio se gana gracias al tráfico de influencias.

Ya antes, el 30 de agosto de 1996 Roberto Campa, líder del PRI en el DF, denunció que Diego Fernández de Cevallos fue favorecido por Carlos Salinas de Gortari con un terreno en el desarrollo turístico Punta Diamante, en Acapulco, mismo que es parte de su convenio con este presidente para obedecer como Presidente del PAN nacional la reorganización interna que el entonces presidente de la República desea hacer hacia dentro de este partido.

Destaca el caso de los hijos de Martha Sahagún, esposa de Vicente Fox, Manuel y Jorge Alberto Bribiesca a quienes se les imputa un fraude por mil 175 millones de pesos.

Otro caso es el de la Lotería Nacional, donde el periódico estadounidense *The Financial Times* afirma un desvío de 200 millones de pesos a favor de la organización *Transforma México*, misma que pretendió ser la plataforma política de Martha Sahagún en su anhelo de llegar a ser candidata al ejecutivo nacional en el 2006.

Se habla del otros mil 321 millones de pesos del Fondo de Desastres Naturales que la Sra. Carmen Segura desvía para preparar la campaña de Santiago Creel, mismos que no se sabe cuál fue su destino final.

Asimismo, se revelan los nexos de Luis Pazos y de Estrada Cajigal con el narcotráfico.

Se sabe que de acuerdo a la Auditoría Superior de Hacienda en el ejercicio federal de 2004, en su cuenta pública hay irregularidades por 33 mil 157 millones de pesos. Situación similar a la de la cuenta pública del 2005 por 26 mil millones de pesos. En la misma cuenta pública se devuelven más de 50 mil millones de pesos a 398 grandes contribuyentes afines a la administración de Vicente Fox.

A pocos días de iniciar la administración foxista, del penal de Puente Grande se fuga el principal líder del cartel del pacífico, el Chapo Guzmán, donde el líder del cartel contrario a éste Osiel Cárdenas, entre otros actores políticos acusan al presidente de proteger a este delincuente, situación que es ratificada por su propio vocero Rubén Aguirre en 2009 quien declara que hay que negociar con el narco, cuestión que ya es un hecho admitido por esta administración en su momento.

Anabel Hernández, periodista galardonada por el premio nacional del periodismo (2002), y asidua seguidora del actuar de la familia presidencial de los Fox y los Bribiesca, en su reciente libro “Los señores del narco”, indica que el Chapo Guzmán ha sido desde la administración de Vicente Fox y la actual de Felipe Calderón Hinojosa, protegido y operador del gobierno en el “control del narcotráfico” en el país. Curiosamente a la fecha las fotos que exhiben del llamado Chapo Guzmán en los medios gráficos como televisivos del país le presentan como era hace casi 30 años en que se da su aprensión, y no como es actualmente... quizá para que si nos lo topamos no lo reconozcamos.

COMICIOS, SUCESIONES Y CONCERTACIONES DESDE LA DERECHA

Si bien el neoliberalismo desde los gobiernos priístas que le implementan (Miguel De la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León), tiene un carácter meramente económico y político, es con el gobierno del cambio de Vicente Fox que inicia el intento de llevarle al ámbito de lo social: destaca el interés por reformar la previsión, asistencia y seguridad social, donde un avance importante son las reformas hacia dentro de la normatividad orgánica del ISSSTE, y la búsqueda de reformas la correspondiente al IMSS. Más aún la controversia a la fecha vigente en el Congreso Nacional al respecto a las reformas a la Ley Federal del Trabajo.

Las políticas de estabilización económica admitidas por la administración de Vicente Fox Quezada ante el Gobierno estadounidense del “Amigo Jorge” (G. W. Bush), a cambio de un tratado binacional migratorio son canceladas como efecto del suceso del 11 de septiembre de 2001. Diez millones de mexicanos migran durante su sexenio a la Unión Americana, lo que se refleja en un incremento sustantivo de las remesas familiares, las que llegaron a ser una de las 3 principales fuentes de divisas del país.

El desempleo, la pobreza, la marginación y la migración caracterizan como principales movimientos sociales a esta administración, sin dejar de lado el aumento de la inseguridad y la delincuencia. Destacan fenómenos tales como el de “las muertas de Juárez” y la proliferación del crimen organizado.

El desencanto de la población ante el llamado “gobierno del cambio” se expresa abiertamente desde el 2005 con el aumento en la simpatía política por los candidatos de la social democracia e izquierda mexicana, donde destaca el personaje político que representa Andrés Manuel López Obrador, quien para los comicios nacionales del 2006 encabeza la segunda fuerza política del país (hay quien sostiene que era la principal).

El neoliberalismo en la región latinoamericana presenta su ocaso con la conversión a regímenes social demócratas y socialistas de naciones tales como lo es Argentina,

Brasil, Uruguay, Bolivia, Venezuela, entre otros. Las reformas nekeynesianas y endogenistas llevadas como parte de su política económica por estas naciones da buenos resultados, y al amparo de la crisis estadounidense subprime y de la administración demócrata de Barack Obama prometen ser una nueva vía al desarrollo.

En México la izquierda mexicana es boicoteada por la ultraderecha en el gobierno. Marcharon contra AMLO hasta el mercenario de MARCOS con su otra campaña que en el fondo era una contra campaña urdida desde la derecha contra López Obrador. En Atenco se le ve desfilar libremente y con amnistía del gobierno alentando, incentivando y sobre todo descalificando la campaña de este candidato político.

La izquierda mexicana desordenada, desmantelada y conflictiva, comete errores que cuestionan su insurgencia y beligerancia política. Primero aprueba junto con el PRI y el PAN la Ley indígena. Resulta en los comicios tan corrupta como la derecha, abre clientelismos y admite cuadros políticos de personas sin militancia, menos aún compromiso y carentes de identidad y legitimidad, destacan los expriístas... y que hay de los videoescándalos, principalmente de René Bejarano, entonces funcionario de la GDF embolsándose lana de un empresario Carlos Ahumada quien trabaja en proyectos de ingeniería civil para el Distrito Federal, en intimidación de líderes del PRD, al parecer para un fondo de campaña de AMLO. El juicio de desafuero (2005) contra López Obrador promovido por la Presidencia de la Republica se logra gracias a la alianza o concertación entre PAN y PRI. Mismo que logra incrementar la simpatía del presidenciable pero no obstante expresa otra iniciativa más que finalmente es parte del desmantelamiento (promovido desde la derecha) de la izquierda mexicana.

Los comicios del 2003 vienen a posicionar al PRI como la segunda fuerza política del país. Gana escaños, curules y espacios de poder. Gracias a ello al presidente Vicente Fox no le queda más que concesionar el poder a cambio de preventas electorales para el 2006. Su candidato Roberto Madrazo Pintado, otro tabasqueño, sigue siendo del grupo de Atlacomulco, ligado a Carlos Hank y a Carlos Salinas de Gortari. En su campaña de 1994 para gobernador de Tabasco se documenta el fraude electoral, mismo que no obstante la libra sin costo político alguno gracias al padrinazgo del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Para los comicios del 2006 destaca su ruptura con la maestra Elba Esther Gordillo, dirigente del SNTE, quien se alía a Vicente Fox como operadora

política y suma una gran cantidad de votos a favor de la campaña de Felipe Calderón Hinojosa.

Aunque se dijo entonces que el candidato del presidente Vicente Fox para la sucesión presidencial era su propia esposa, Martha Sahagún, los escándalos relativos a los malos manejos de la organización “Vamos México”, de la Lotería Nacional, de sus hijos, no fueron bien vistos desde la órbita del propio partido de acción nacional, por lo que esta iniciativa es rápidamente abandonada por la posible candidatura de Santiago Creel, a quien le pegan de inmediato por los escándalos de las concesiones a Televisa respecto a permisos para abrir casas de juego por parte del Gobernación ¡Más negociaciones tras el poder!

Finalmente la candidatura del PAN es dada a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa.

ELECCIONES DE ESTADO

Si bien el PRI establece un candidato a presidente al gusto del presidente en turno, el desafuero de Andrés Manuel López Obrador deja en claro que el estilo del PAN es imponer una elección de Estado.

Una estrategia proselitista de precampaña propia de los panistas es que el Ejecutivo inicia una serie de giras por la República mexicana donde alienta las simpatías políticas, para que posteriormente venga a visitar el mismo lugar el candidato al ejecutivo nacional del PAN. Al menos así se hizo durante la administración de Vicente Fox Quezada, mismo que se jactaba de haber llevado a los pinos a dos candidatos del Acción Nacional.

La revista Emmequis indica que en los últimos 23 meses del gobierno de Vicente Fox se gastaron 69 millones de pesos del erario público en levantar encuestas electorales para favorecer la campaña de Felipe Calderón Hinojosa.

Quien fue el primer y principal promotor de campaña del actual presidente de la República mexicana fue precisamente Vicente Fox, a quien se la debe “aiga sido como aiga sido”, cuestión que no le agradó a este último en la toma de poder quien no dejó que fuera el presidente saliente quien le pusiera la banda presidencial.

La precampaña de la ultraderecha se ampara con la aprobación de la Ley Televisa, donde se disminuye el tiempo que las televisoras deben dar al Estado como espacio para fines públicos. En pago los spots publicitarios de la campaña de Calderón se dieron a precios mucho menores que los de los otros candidatos.

La presidencia paga 456,435 spots de radio y televisión por un valor de 1 710 millones de pesos tomados del erario público, no obstante la Suprema Corte de Justicia le pide suspenda esta actividad proselitista, que es violatoria de la Ley electoral.

La ética política queda atrás, el mensaje se cargan de miedo y odio, con tal de desprestigiar a los contrincantes del blanquiazul. Crearon divisiones entre los mexicanos y fomentaron la exclusión y hasta el desprecio.

Se habla de la asesoría de extranjeros, de la que destaca Dick Morris, norteamericano de ultraderecha, y del español Antonio Solá, también de formación ultraderechista.

La satanización de los candidatos a toda costa y bajo toda inmoral fue un recurso socorrido por la ultraderecha fascista mexicana. Incluso dieron amnistía al subcomandante MARCOS (abiertamente aparece como un mercenario de la derecha), quien con su otra campaña, ayudó al desmantelamiento de la izquierda mexicana y al desprestigio de su principal candidato opositor: AMLO.

La intolerancia fundamentalista de los neosinarquistas, coaligados en fórmulas de mafias basados en cofradías y hermandades secretas del tipo YUNQUE y MURO, trataron de crear paráfrasis políticas entre la izquierda mexicana y regímenes socialistas tales como los de Cuba o Venezuela. Se habló de lo que consideraban un peligro para México y los movimientos sociales que daban amparo a la izquierda se les desprestigia como movimientos de criminales y delincuentes, por caso el movimiento magisterial de Oaxaca.

A esta campaña de satanización se le suman las principales empresas, y con ello, las principales familias más adineradas del país. En ello destacan Roberto Hernández, Don Claudio X González, Lorenzo Servitje y Gastón Ascárraga (Barajas, 2010; 40).

Desde luego lo que les ofrece la candidatura del PAN en el 2006 como la próxima para el 2012 es la preservación de sus privilegios de todo tipo.

Similar a como lo hizo Carlos Salinas de Gortari, en el sexenio de Fox la SEDESOL maneja los programas sociales con tintes partidistas. Carmen Aristegui documenta que el PAN cruzaba información de la SEDESOL de sus programas sociales con el padrón electoral, quien su operador era la empresa Hildebrando, propiedad del cuñado “incómodo” de Felipe Calderón, Hildebrando Zavala. Delito electoral impune.

El mismo IFE estaba vendido a la derecha mexicana, Luis Carlos Ugalde, atendía su agenda política con base a las directrices que le dictaba la segunda operadora de la campaña de Calderón Hinojosa, Elba Esther Gordillo, líder nacional del SNTE y pieza clave en el proceso electoral del 2006 en pro del PAN.

Si bien todos estos hechos que nos vienen a la memoria de hace 6 años, es importante entonces identificar ahora cuáles son las nuevas estrategias del Ejecutivo nacional para imponer su candidato y lograr una elección de Estado en el 2012... primero, que se defina el candidato oficial del PAN a la presidencia de la República... y segundo, no olvidar la experiencia de hace 6 años.

ULTRASALINISMO Y NEOPORFIRISMO COMO EXPRESIÓN DEL NEOLIBERALISMO

El ultrasalinismo se refiere a la consecución del programa económico implementado por Carlos Salinas de Gortari durante su administración (1988 – 1994), cuyos lineamientos en realidad no son propios sino aquellos impuestos por la Reserva Federal estadounidense, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Las reformas neoliberales son dictadas desde el exterior a las administraciones de Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa. Si bien el primero de estos presidentes echa a andar las reformas económicas, es Zedillo quien implementa las reformas políticas a favor de fortalecer la democracia cristiana, y que culminan con el arribo del PAN a Los Pinos.

La encomienda desde Vicente Fox Quezada es la privatización del sector salud, ampliar la apertura económica, privatización de las paraestatales en materia energética, reforma fiscal y la reforma laboral. En esto la reciente extinción de la empresa de Luz y Fuerza del Centro obedece a la resistencia beligerante de su sindicato (el SME), quien era un pilar fuerte de la izquierda mexicana, como el principal opositor a las privatizaciones del sector energético.

Este es el llamado neoliberalismo social, que más allá del económico basado en apertura económica, menos regulaciones y desmantelamiento del aparato de gobierno, así como del neoliberalismo político que lleva al PAN al poder federal, trata de reformar la legislación laboral en México a favor de la flexibilidad laboral como del nuevo sindicalismo democrático, así como reformas las leyes orgánicas del ISSSTE y del IMSS, cuestión que le pega directamente a los derechos y prestaciones laborales de los trabajadores del país y que, por otra parte, es el principal pilar del corporativismo estatal armado por el PRI desde tiempos del PNR con Plutarco Elías Calles en 1929.

Las reformas desde luego van en razón de los intereses de la gran empresa mexicana como extranjera. Así se plantea el fundamento de un esquema de producción flexible basado en la sobre explotación y el saqueo por parte de las empresas transnacionales, especialmente las estadounidenses.

La plutocracia al momento ha logrado desmantelar el estado social, agenciarse el patrimonio nacional y sujetar al Estado a su servicio. Cuarenta familias controlan la economía y la política nacional, propiamente tienen el poder sobre el pueblo y gracias a ello logran retroceder la situación social de la nación a las épocas del porfirismo, es por ello que la ultrasalinismo se le nombra también neoporfirismo.

El servilismo del Estado mexicano es patente en todo momento ante la entrega del aparato de gobierno a su servicio en materia de logística económica para sus inversiones, en garante de sus intereses políticos en el país, pero principalmente como una extensión más de su imperialismo en el sometimiento de una sociedad periférica y hasta provincial de su capitalismo central.

LIBERALISMO AUTORITARIO

Se ha roto el pacto social establecido desde Plutarco Elías Calles en el país, el arribo al panismo poco reconoce el fundamento corporativo priísta, no obstante se hace del mismo para la estabilidad y fundamento de su gobierno.

Con un comicio cuestionable, se gobierna a la nación con un fuerte contingente de oposición política. Peor aún, el gobierno foxista ha minado las bases del gobierno pegando duro a los movimientos obreros y a sus organizaciones. Destaca recientemente en el gobierno calderonista la extinción de Luz y Fuerza del Centro, cuya finalidad en realidad persigue la desaparición, sino el debilitamiento del SME.

La insurgencia contra el gobierno no consiste en los bastiones de guerrilla en las sierras del sur del país tales como el ERP, el ERPI o el EZLN. Es de carácter urbano y adquiere matizaciones de crimen organizado. Su beligerancia es fuerte y recurre a tácticas paramilitares altamente disciplinadas.

La guerra irregular o de baja intensidad es la táctica seguida por la presente administración para enfrentarles. Hasta ahora más de 40 mil ejecuciones hablan de un costo social y político que es la principal causa de que el PAN pierda los comicios federales para el 2012.

Un gobierno abiertamente impopular y antipopular, cuya encomienda es la represión y contención de las fuerzas revolucionarias en pro de sostener un régimen de gobierno a favor de la alta burguesía tanto nacional como internacional.

Es la plutocracia la clase que gobierna al país, compuesta de 20 familias dueñas de las empresas más grandes de México. Suprimen las libertades individuales como las garantías sociales a favor de las libertades del mercado, más que un fascismo plutocrático, es un fascismo plutonómico.

El aparato de enajenación de las conciencias se funda en el control de los medios masivos de comunicación, en especial los televisivos como los radiofónicos. Por medio de estos medios difunden y logran posicionar en las mentalidades su ideología, juicios y criterios que legitiman la racionalidad supra burguesa, como destruyen la imagen y legitimidad de las movilizaciones populares, de izquierda, de oposición y en especial aquellas de carácter abiertamente insurgente.

Gobernación da línea editorial a los medios para que se desvirtúen las movilizaciones populares de protesta, por caso, el movimiento magisterial de Oaxaca, de Michoacán, del SME, entre otras.

Las quiroprácticas psicológicas mediáticas logran aturdir conciencias y disminuir el discurso de oposición con fundamentos reaccionarios. Es difícil cambiar la opinión de las personas quienes replican las sentencias de los comentaristas mediáticos, cuya palabra tiene un peso de convicción como si se tratara de “palabra divina”. Su nivel de convencimiento es dogmático, inapelable... inatacable.

Se valen de las pasiones, las emociones, nuestros afectos para vía chantaje, manipular la opinión y la simpatía a personajes de la política, a partidos, a instituciones y a movimientos sociales.

Estas quiroprácticas psicológicas mediáticas son ahora bautizadas como la guerra de cuarta generación. Se siembra el terror, el temor, el miedo, la sumisión, la duda, la incógnita, se crea ignorancia dirigida, y sobre todo, se controla a la población mediante el mensaje mediático prefabricado con dichos fines... medio de gran poder para la alta burguesía que descansa en la tranquilidad del amparo que crea la manipulación de las conciencias y la creación de mentalidades ad hoc a sus intereses.

Las quiroprácticas psicológicas mediáticas son acciones que mediante los medios de comunicación masiva, instancias de alto control o de control central como el Estado o una clase social con peso plutonómico, realizan para trastornar conciencias, mentalidad, intereses, ideologías, sentimientos, simpatías, incluso crear antipatías, fobias, odio y miedo.

Persuaden y disuaden, a veces hasta confunden a la población. Son guerras asimétricas o sin fusiles que crean las movilizaciones sociales necesarias para promover o garantizar sus intereses, o bien si no las crean las trastocas para darles las orientaciones que les sean convenientes.

Si bien antes a la prensa se le consideraba el cuarto Poder, son ahora las televisoras las que ostentan tal mérito. Se trata de operativos psicológicos realizados por expertos en comunicación y en psicología social y cuyo principal interés es el control de la población mediante un bombardeo constante de mensajes teledirigidos.

Si bien la religión es un instrumento de enajenación con fines similares, la nueva era de la información la suple por el poder de los medios masivos de comunicación. El nuevo ministerio de las creencias, las mentalidades, las ideologías es la televisión. Esa caja de pandora que logra atar las simpatías como las antipatías de sus tele-escuchas.

Si en el siglo XIX la inspiración de un estado laico y la secularización de las instituciones del país obedecía a restarle peso a la fe como a la Iglesia católica, ahora se hace necesario un cambio de laicidad, del desapego al pensamiento religioso al desapego a los medios masivos de comunicación, cuestión que solo puede ser posible con un alto grado de educación de la población.

En el fascismo mexicano se combina la fe con las operaciones quiroprácticas psicológicas mediáticas para patentar los fundamentos y legitimidad del nuevo estado mexicano neoliberal, neoconservador. No obstante, la represión por medios judiciales y militares hablan de que aún la eficacia de la guerra de cuarta generación dirigida a la población mexicana, no obstante es necesario un estado fascista de corte dictatorial, que valiéndose de la violencia de Estado contiene la insurgencia, la protesta y la

beligerancias de las movilizaciones sociales contra partida que constantemente surgen por todo el territorio nacional.

No hay pacto social con el PAN, como gobierno neoliberal, menos aún compromiso con la democracia siendo este gobierno uno basado en el fascismo de Estado.

SEGUNDA PARTE: FASCISMO DE ESTADO (ESTADO FALLIDO Y DE EXCEPCIÓN).

ESTADO DE EXCEPCIÓN

El 02 de diciembre de 2006 en Oaxaca se vive un estado de excepción. Precisamente un día después de la toma de poder del reciente presidente Felipe Calderón Hinojosa. Con ese evento se inaugura en México el terrorismo de Estado. De tácito se suspenden las garantías individuales, el allanamiento de moradas se acometía abiertamente por las fuerzas judiciales, sin necesidad de contar con orden judicial, juez u otra autoridad.

Amnistía internacional denuncia la violación flagrante de los derechos humanos en el país. Prácticas de tortura, escarnio y desapariciones son la estrategia del gobierno para someter a los disidentes. Las detenciones realizadas en una entidad se resuelven en entidades distintas para con ello evitar una defensa eficaz e inmediata... la disuasión y el atropello son parte de la coerción estatal.

En ese tiempo nada más en la entidad de Oaxaca se dan 30 desapariciones forzadas, las víctimas son parte de los movimientos insurgentes tales como el EPR, el ERPI, y otros movimientos campesinos y de organizaciones de trabajadores, especialmente los de la educación. La respuesta insurgente se da mediante atentados a las instalaciones bancarias en el Estado de México y el Distrito Federal, así como de las instalaciones de PEMEX en varias partes del país.

La policía antsubversiva y los primeros arrestos van contra los dirigentes de la APPO, donde queda velada la intolerancia y el desinterés del Estado en llegar a una negociación con este movimiento social. En total se tienen 349 detenciones, 370 lesionados, al menos 20 muertos y un gran número de personas desaparecidas.

Amnistía internacional denuncia para el 2007 que en México existen al menos 500 presos políticos, dirigentes de movimientos sociales beligerantes al régimen, entre otros como son periodistas, intelectuales, ecologistas y defensores de los derechos humanos.

Ese 02 de diciembre, al parejo en que se da la represión en Oaxaca contra la APPO el sueldo de los militares recibe un sustancial aumento. Un estado represivo y opresor con un carácter judicial que raya en lo militar. El gasto militar también incrementa su presupuesto, restando 4 mil 500 millones de pesos a la educación y la cultura, en rubros destinados al financiamiento de la educación pública superior, destacan las universidades públicas como la UNAM y las universidades autónomas de las entidades federativas.

La represión a los comunicadores no alineados al régimen se vivifica o encarna en el caso del periodista José Gutiérrez Vivó, quien es amenazado por la coordinación de comunicación social de la presidencia de la República y sometido a censura. Esto el 06 de diciembre de 2006.

La nueva administración de inmediato matiza el carácter punitivo de su ejercicio contra todo aquello o aquel que pinte como insurgente o subversivo. Al principal opositor electoral de Felipe Calderón, Andrés Manuel López Obrador se le amenaza de procesarle por conspirador al Estado.

En su estado natal, Michoacán, Felipe Calderón emprende el 12 de diciembre de 2006 un operativo policial respaldado por el Ejército Nacional contra el crimen organizado, inmediatamente se trabaja igual en otras entidades tales como Chihuahua, Durango, Baja California, Sinaloa. Se declara la guerra al narcotráfico para legalizar la salida del ejército a las calles, cuestión que mediante un decreto presidencial se formaliza el 24 de enero de 2008, donde se afirma que la militarización de la vida pública en México se prolongará hasta el término de la presente administración... en el 2012.

Se persigue el crimen organizado, pero también a los disidentes al régimen. Caen narcos como líderes sindicales o de movimientos sociales subversivos, mueren capos como guerrilleros y se arrestan delincuentes como periodistas e intelectuales, maestros como políticos. Los llamados efectos colaterales también son un costo social significativo en el número de defunciones como en el atropello de las garantías como de los derechos humanos.

El ejército en las calles no es más que un operativo para reprender a quienes se opongan al régimen de ultraderecha. El garrote contra el pueblo. El ejercicio de un poder basado en la violencia de Estado.

Mientras la policía disuade, el ejército ataca a la población. El riesgo es despertar la violencia social y perder el orden y la estabilidad política. Para el 2011 la violencia a tomado dimensiones inauditas, solo comparables a la situación civil de 1910 lo que deja al descubierto la existencia de una guerra de baja intensidad en el país.

La búsqueda de restaurar la legalidad en el país se procura con bases anticonstitucionales como es la presencia del ejército en las calles. Para ello el artículo constitucional 129 establece las condiciones en que debe operar el Ejército nacional en el combate de algo existiendo paz social.

La estrategia de establecer como enemigo común al crimen organizado, en especial al narcotráfico, es un fundamento que busca simpatía y unidad nacional en su combate. Pero los costos colaterales son muy altos y tienen inminentemente un costo político de antipopularidad para el ahora partido oficial.

NARCO, CRIMEN Y NEOLIBERALISMO

Es durante las dos guerras anglo chinas también llamadas del opio de 1839 a 1842 y 1856 a 1860, que el emperador chino *Qianlong*, expulsa a los productores y comerciantes de esta especie, quienes migran al otro lado del océano pacífico, siendo su principal destino San Francisco y San Diego, en la costa californiana de la Unión Americana.

Esta inmigración china se destina laboralmente a varios sectores de servicios y productivos de la economía norteamericana receptiva, donde destaca la construcción de vías de ferrocarril por la ribera occidental propia del océano pacífico.

La construcción de la línea férrea del primer ferrocarril transcontinental de los Estados Unidos de América se da en 1860, red que une la costa este del océano Atlántico a la

costa del oeste del océano pacífico. En esta obra se contrata una gran cantidad de chinos inmigrantes precisamente por efecto de las guerras del opio.

Es a partir de 1880 en el mandato del presidente Porfirio Díaz que se otorgan concesiones a compañías inglesas y norteamericanas para la realización de vías de ferrocarril del lado occidental de México que parte de la entonces ciudad de México hasta Nogales. Las últimas concesiones a norteamericanos en el rubro se dan en 1904 – 1906. Y es precisamente en el tendido de estas líneas férreas que muchos de los trabajadores que participan son de ascendencia china.

No solo vienen como trabajadores de las compañías norteamericanas encargadas de realizar nuevas líneas de ferrocarril en la franja occidental norte de México, sino que incluso se viene un fuerte contingente migratorio de este tipo de población a radicarse en terrenos de Baja California, Sonora y Sinaloa.

El cultivo del opio se inicia en el país precisamente como parte de las economías que estos inmigrantes implementan. La primera guerra mundial (1914 – 1918) resulta ser un fuerte incentivo del cultivo de esta especie dado que el mercado estadounidense demandaba fuertes cantidades de morfina para respaldar su ejército comprometido en Europa en esta primera contienda mundial.

El cultivo de este estupefaciente no es prohibido en México puesto que de hecho su consumo nacional es principalmente de carácter médico y muy modesto, el principal mercado es el norteamericano y cuya demanda es significativamente superior.

El clima de Sinaloa resulta bastante generoso para el cultivo del opio, que fue seguido por la marihuana, planta de la que se obtiene sustitutos de la morfina y la heroína y cuyo uso clínico es de especial interés como un fuerte analgésico.

El mercado de estas especies y sus derivados se mantiene durante todo el siglo XX, la segunda contienda mundial le encumbra como un comercio bastante rentable y es durante el periodo de Ruiz Cortínez que el ejército mexicano inicia su regulación y control.

No obstante la existencia de producción en México no irradiaba en consumo a la población nacional puesto que no existe realmente su uso de forma cotidiana. Son algunos tipos de población quienes la consumen de la que destaca principalmente el ejército raso mexicano.

El problema se da cuando en 1991 durante la administración de Carlos Salinas de Gortari se cancelan los subsidios al campo. La inminente firma del tratado de libre comercio con América del norte, que se inaugura en enero de 1994, supone la supresión de toda fórmula de subsidio o subvención económica, que distorsione los precios de mercado. En ello, la reforma al artículo 27 constitucional le otorga un nuevo carácter a la propiedad agraria, especialmente aquella de tipo comunitario, usufructuario, propiamente el ejido.

Es entonces que los distritos agrícolas del país entran en crisis, por caso Caborca en Sonora, Valle de Santiago en Guanajuato, como pueden citarse otros más municipios cuya vocación agrícola se ve comprometida ante la pérdida gradual de los apoyos al campo.

Las políticas neoliberales no son privativas de México, se dan en toda la región latinoamericana. Destaca el caso de Colombia, que en esas mismas fechas viene a cancelar sus subvenciones a los campesinos agrícolas condenándoles a cultivos cuya rentabilidad no se sostiene sin el apoyo antes otorgado. En México se tuvo “el Norte”, que es una alternativa para la población rural del país quienes iniciaron un éxodo que en México ya existe desde el siglo XVIII pero que si bien se incentiva durante la segunda guerra mundial, es en la década de los años 90 de la centuria pasada que se dimensiona a una escala muy superior. En Colombia no hay “Norte”, por lo que los campesinos buscaron cultivos más rentables, como es el caso de la coca, y se armaron “hasta los dientes” para repeler al gobierno cuando incautara sus cosechas y bienes o viniera en su perjuicio tratando de erradicar este tipo de economía.

Si la pérdida de subvenciones al campo motiva la migración campesina en los años 90, es en el año 2000 que todavía recibe una fuerza adicional mediante la implementación de las políticas de estabilización económica inauguradas por la administración federal de Vicente Fox Quezada. Efecto inmediato es que las remesas familiares repuntan a ser

una de las principales fuentes de divisas de la nación compitiendo con el petróleo, las exportaciones manufactureras como con el turismo extranjero.

Se estima que un cuarto de millón de connacionales cruzan al año la frontera norte del país en busca de oportunidades económicas, especialmente laborales. 17 millones de mexicanos actualmente residen en la Unión Americana. 1 de cada 6 mexicanos se encuentra fuera del país actualmente. Razón matemática que cuestiona a cualquier régimen de gobierno.

Por otra parte, prospera la economía informal como la ilegal. Negocios informales como corruptos se dan por todo el territorio nacional. La delincuencia organizada es para el 2006 un emporio de poder y dinero sucio. Operan clandestinamente pero sus capitales son tan significativos que patrocinan campañas, compran políticos y funcionarios, administran al derecho o bien lo mutilan a su interés. Matan impunemente a sus enemigos y operan con abierto amparo de autoridades compradas. Se han infiltrado en toda la red social del país.

Si bien el combate al narcotráfico es necesario, junto con el crimen organizado y el crimen en general, en realidad al presente administración atiende a aun extensión de un programa estadounidense relativo a su seguridad nacional ante el riesgo que el terrorismo representa más allá de sus fronteras, especialmente al de México, considerada la más porosa del mundo.

Incluso en México se habla de narcotráfico, tráfico de armas y terrorismo. Tres líneas de combate que justifican la “guerra” que permite sacar al ejército a las calles. El terrorismo de Estado crea un terrorismo en la población civil manejado por los insurgentes al régimen encabezados por más del 36 movimientos armados en el territorio del país, según lo declara SEDENA, de los que destacan los movimientos del EZLN, el ERP y el ERPI, movimientos ligados a la izquierda radical del país.

So pretexto de combate al narco, se aprovecha la ocasión para de una vez “darle duro” a los revoltosos. México se vuelve el país más peligroso para ejercer el periodismo. Reconocimiento internacional constantemente recordado por amnistía internacional. Líderes sindicales y de movimientos sociales, como los magisteriales, de la APPO, y de

otros sindicatos (SME), caen como reos políticos y desaparecidos (por no calificarles como ejecutados).

Esta es otra muestra de cómo las políticas neoliberales han creado y enconado problemas nacionales que si bien antes existían, ahora adquieren dimensiones muy superiores y representan disrupciones cuyo costo social no es admisible para ningún gobierno del corte que sea. Si a Augusto Pinochet se le atribuyen a 3000 ejecuciones durante 17 años (de 1973 a 1990), las actuales ejecuciones de tan solo 5 años llevan directamente al presidente Felipe Calderón Hinojosa a ser sujeto de consideración por sus crímenes *leso humanidad* que se estiman superan ya las 40 mil ejecuciones, cuya responsabilidad bien directa o indirecta no es con todo menospreciable.

PREBENDAS POSELECTORALES AL 2006

La educación en México es de lo más cuestionable. No obstante la nación recientemente invierte en educación, evaluaciones hechas por la OCDE reprueban la calidad de la misma y ubican a la nación en niveles similares a la República de Santo Domingo o Haití.

Por otra parte existen intereses centrados en la educación como un negocio. En ello destaca la Iglesia católica mexicana quien a cambio de su apoyo al partido de acción nacional para lograr sufragios favorables, ha logrado concesiones especiales en la materia. La libertad de credo encubre en el fondo la libertad que se le da a esta Iglesia para promoverse en medios masivos con señales radiofónicas, televisivas, medios impresos, entre otros. Así la laicidad del Estado mexicano queda encubierta por la libertad de credo donde la única usufructuaria de este derecho es la Iglesia católica.

Incluso logra colocar sus “agentes” en puestos públicos. Destaca el Dr. José Agustín Córdoba Montoya quien funge como secretario de salud y es precandidato al PAN para la gubernatura del estado de Guanajuato. Una entidad gobernada por el YUNQUE desde el año 2000. El Doctor Córdoba está vinculado a la Diócesis de México.

La derecha se vale de otros medios para perpetuarse en el poder. Destaca la Ley Televisa que resta tiempo aire al espacio público de emisión a favor de ser un espacio que ganan las televisoras y que les resulta muy rentable. Las principales beneficiarias son TELEVISA y Televisión Azteca. A cambio de prestar servicios de proselitismo al Estado como al partido oficial.

En los comicios del 2006 se le dieron concesiones a los grupos empresariales que apoyaron al PAN en sus campañas por los puestos de elección popular del momento. Se autorizan la apertura de bancos tales como Banca Azteca, Banca Coppel y Banca Wall – Mart. Hubo otros premiados tales como los encuestadores que manipularon las encuestas a favor de crear simpatías al PAN. Directivos de las empresas GEA-ISA terminaron por ocupar puestos en el CISEN y en PEMEX.

La legitimación de la elección del Felipe Calderón en Europa lo encabeza el periódico español El País, propiedad del grupo PRISA, cuyas inversiones en México estaban comprometidas con la elección al grado que el cuñado incómodo de Calderón, Ignacio Zavala, queda con el nombramiento de representante de la empresa para las publicaciones del Bicentenario, como negocio editorial.

A las ahora llamadas las “20 familias” el régimen les ofrece privatizaciones subastadas a precios muy bajos para que sean adquiridas por éstas, exenciones fiscales, bajos salarios, flexibilidad laboral, extinción de sindicatos, principalmente.

Destaca la implementación del liberalismo social que es un pendiente en la agenda del neoliberalismo en México. Lo que toca al artículo 123 de la constitución y a otras leyes secundarias como lo es la Ley Federal del Trabajo y la reforma a la Ley orgánica del ISSSTE.

LEY DEL ISSSTE Y SEGURIDAD SOCIAL

El 15 de marzo de 2007 la administración de Felipe Calderón Hinojosa presenta ante el Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al sistema de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La iniciativa cuenta con el apoyo de la bancada priísta que vía concertaciones ve en los comicios recientes como los del 2009 oportunidades de apoyo para ganar más terrenos políticos.

La alianza no solo es con la bancada priísta sino también con el corporativo base del Estado, la Federación de Sindicatos al Servicio de los Trabajadores del Estado (FSTSE). También aparece el SNTE y con otras alianzas parlamentarias del PAN con el PVEM y Nueva Alianza.

Con el artículo 123 constitucional, existe la obligación del Estado de brindar seguridad social a la población mexicana. El ISSSTE proporciona este aspecto a alrededor de 2 millones de derechohabientes, como a sus familias que son otros 10 millones de personas.

La seguridad social en México presente un principal oponente en la base patronal, a quienes nunca les agrada la carga financiera del pago de este servicio por sus trabajadores contratados.

Un régimen de ultraderecha desde luego lo que desea es dar este servicio pero descargando de carga a la clase patronal, más bien que la paguen los propios trabajadores. Es por eso que nace el Seguro Popular.

Desde el 2000 con la administración de Vicente Fox Quezada, se restringen los presupuestos a las instituciones que dan seguridad social a la población, con ello viene el deterioro de la calidad de los servicios que prestan. Incluso las iniciativas por mitigar este tipo de servicios vienen desde el tiempo de Ernesto Zedillo Ponce de León quien en 1997 se privatiza el sistema de jubilaciones del IMSS, donde las aportaciones de ahorro de los trabajadores se individualiza para manejarse como cuenta bancaria y se entrega al sistema SAT, vía AFORES, quienes administran los fondo de retiro. Sindicato de ahorradores, logran mejores tasas de interés que a nivel individual pero que por otra forma, aporta fondos adicionales importantes a la banca privada mexicana.

El riesgo es que la fuente de las ganancias bancarias es la administración de los recursos por una banca que los arriesga en la BMV, y especula con ellos. En determinada instancia, similar a como sucede en 1994, estos fondos bien se devalúan o pierden en una especulación arriesgada e irresponsable.

El principio del SAT y de las Afores no es malo, solo que funciona bien para naciones con estabilidad económica a largo plazo, altos niveles de ingreso y bajo nivel de desempleo, donde el desempleo friccional es subestimable. En el caso de México esta inestabilidad económica indica que los márgenes de interés real son más modestos e incluso negativos ante la devaluación e inflación. Asimismo, las aportaciones son bastante modestas como para que como fondo de retiro signifiquen un aliciente importante. Agregando a ello está el tiempo del desempleo friccional que ante la flexibilidad laboral se viene ampliando al grado que en términos reales el salario del trabajador resulta una cuota o dieta paupérrima.

Las Afores en el país operan con comisiones muy altas, el doble de las obtenidas en naciones de ingresos altos. Desde su inicio se deja ver el interés corrupto de la forma en que vienen operando. Actualmente se sabe que en sus transacciones está oculto otro fraude de dimensiones mayúsculas al igual que el FOBAPROA, cuestión de tiempo para que nos den la sorpresa. Mientras que desde inicio de sus operaciones las ganancias de las Afores fueron multimillonarias, ya para el 2010 muestran pérdidas en sus rendimientos.

La aparente quiebra de las instituciones de seguridad social es el fundamento de las iniciativas de reforma de sus leyes orgánicas. No obstante las aportaciones de los trabajadores no ha sido velado públicamente en cuando su administración y debido uso.

La razón que se esgrime para explicar la insolvencia del sistema de pensiones es el envejecimiento de la población y el crecimiento de enfermedades degenerativas propias de una población más longeva. Mismas que son más onerosas y persistentes.

La falta de crecimiento real de la economía, rezagado al crecimiento demográfico es la razón principal de este problema. Más empleo, mejores salarios y estabilidad son tres insumos necesarios para que todo sistema de pensiones basado en un histograma de

población de población joven funcione. No es el incremento de la longevidad sino la falta de dinamismo económico lo que ocasiona la crisis del sistema de pensiones en el país.

Ante el congelamiento real del salario en el país, cuestión que se viene dando desde 1965, los contratos laborales colectivos se han sesgado a tratar de compensar con mayores prestaciones el bajo nivel de la dieta del trabajador. Cuestión que recientemente se agudiza. En ello, el incremento de servicios comprometidos en materia de asistencia, previsión y seguridad social son cargos extras al sistema de la seguridad social nacional.

También la pérdida de contribuyentes por la generalización y cada vez más socorrida firma de contratos individuales, mediante contratos vía honorarios que son la manera en que se materializa la flexibilidad laboral. Así también la existencia del propio Seguro Popular que sin ser obligatorio, muchos empleadores ven como alternativa a un costo menor de contratación de seguridad social para sus empleados. En la actual administración se ostenta el reciente y de súbito incremento de derechohabientes de este tipo de servicio.

La nueva Ley del ISSSTE afecta al trabajador al cancelar muchos de sus derechos como a su cuota de contribución que se vuelve más onerosa. Mientras antes la aportación es de 8% de su salario, ahora esta es de alrededor de 11%. Antes en su retiro el trabajador percibe el 100% de su sueldo, ahora percibe entre el 35% y 45%. El sueldo mínimo era de 4 salarios, ahora solo es de 2. La edad de jubilación aumenta hasta en 10 años. Aparecen nuevas cuotas tales como el seguro para los pensionados, de invalidez y de muerte. Su aportación para su jubilación que antes es de 3.5% de su salario ahora pasa a ser de 6.75%.

Son los trabajadores del Estado quienes recientes y asimilan los costos de la crisis del sistema de seguridad social del país. Merma el derecho de los trabajadores, sus salarios y su ahorro laboral. Se pierden con esto 48 años de lucha de las organizaciones de trabajadores en materia de ganancia en este rubro.

La privatización se empieza a asomar ante la contratación de prestadores de servicios particulares en los servicios de salud. Se inicia el desmantelamiento de clínicas y hospitales de este sistema, similar a como sucede en el IMSS. Con ello se afecta a 12 millones de derechohabientes del ISSSTE. Favorece a la base patronal como al propio Estado quien relaja sus presiones financieras en la materia, como se deslinda de gran parte de sus responsabilidades.

A la hora de convertir las cuentas públicas de los trabajadores a cuentas particulares el Estado se endeuda con 0.4 billones de pesos adicionales a la deuda pública ya existente, lo que representa un 50% de incremento. Irónicamente el resultado de las reformas que pretendían desendeudar al Estado, causan su mayor endeudamiento.

Es el 31 de marzo del 2007, 16 días después de ingresada la iniciativa al Congreso de la Unión, es aprobada la nueva Ley de ISSSTE. En caliente. Gracias a las alianzas logradas con el PAN, PRI, PVEM y Alternativa Socialdemócrata, quienes lograron concertaciones importantes de corte político. Con ello, el Estado ultra burgués mexicano se deslinda de gran parte de su obligación constitucional en materia de seguridad social, entrega las pensiones a especuladores inmorales y corruptos, a banqueros y de corredores de bolsa y entrega la salud de la población al escarnio abusivo de las altas rentas de las clínicas particulares.

TERRORISMO DE ESTADO

Según la reforma al código penal de abril de 2007, por terrorismo se entiende todo acto que atente contra la seguridad nacional o presione a las autoridades para que tomen una determinación. A esta reforma se le llamó Ley Gestapo.

El terrorismo de Estado adquiere otra semántica. Por citar un caso, el 25 de febrero de 2007 la indígena Ernestina Ascencio de 73 años muere por efecto del brutal ataque de las fuerzas de seguridad pública quienes la victimaron y según revela su autopsia había sido atacada sexualmente. Médico peritos franceses determinan que la muerte de la indígena es por causa de contusiones internas, producto precisamente de una violación. Esta indígena era madre de otra víctima que murió por fractura de cráneo y cuyo cuerpo

es encontrado a 100 metros del cuartel militar de Atzompa, en el estado de Veracruz. El médico legista del momento sostuvo el diagnóstico hasta el final, para el 2010, es cesado por la PGJE.

En el seguimiento que muchos periodistas de destacado prestigio dan al caso resalta el de Carmen Aristegui, a quien su empresa no le renueva el contrato para sacarle del aire. Meses se le ratifica bajo la presión de otros medios que ven violatoria a la libertad de expresión, de información y de prensa esta decisión de su empresa empleadora (W Radio, perteneciente a Televisa).

El terrorismo de estado adquiere otras dimensiones en materia de *leso humanidad*. Amnistía internacional en el 2009 denuncia la violación de los derechos humanos por parte de militares contra la población civil. Se trata de arrestos injustificados, desapariciones, tortura, ejecuciones, principalmente. Este tipo de violaciones a los derechos humanos adquieren matizaciones regionales, destaca la franja fronteriza del norte del país donde la violencia adquiere niveles nunca antes vistos. Otra víctima más es Josefina Reyes, defensora de los derechos humanos, similar al caso de Digna Ochoa años anteriores en el Distrito Federal.

La paramilitarización es otro brazo subrepticio del terrorismo de estado. Como premio a y garante a la operación de este tipo de fuerzas destaca la amnistía que la Suprema Corte da a los paramilitares responsables de la matanza de Acteal, en el estado de Chiapas. La matanza de Aguas Blancas en 1997 adquiere paralelismo con la de San Juan Copala, en Oaxaca donde una caravana por la paz es balaceada por grupos paramilitares alineados al PRI, igual al caso de Acteal.

El sistema de justicia mexicano siempre se ve comprometido con sus gobernantes, a quienes se ve obligado a cuidar y ver por los intereses de los grupos en el poder. Termina por criminalizar a la oposición como a los subversivos al régimen. Ve sedición en todo aquello que no se alinea al sistema y no vele por los intereses de la clase burguesa del país. La imparcialidad de la justicia se vela recientemente en la impunidad dada a Amigos de Fox, a Carmen Segura, a Vamos México, a los hermanos Bribiesca, sigue pendiente lo del FOBAPROA, a los responsables de los infanticidios de la

guardería siniestrada en Sonora, a las ejecuciones y desapariciones de líderes sindicales y movilizadores sociales, citables los de Atenco y los de la APPO, en otros.

Un gobierno supuestamente de izquierda, del PRD, es responsable de la represión violenta de pobladores de Atenco, en el estado de México, donde mueren 2 personas y 27 mujeres son sujetos de tortura y violación. En las filas de los pobladores de Atenco desfilaba el comandante MARCOS promoviendo su “otra campaña” contra Andrés Manuel López Obrador. A éste no le tocó ni el más mínimo macanazo, pues es un agente encubierto de la derecha, infiltrado en la izquierda y boicoteador de la misma. En lo que va del sexenio, del comandante Marcos ya no se hace mención alguna, dejando impune si actuar como mercenario antes del PRI (1994 – 2000) y recientemente del PAN.

A los dirigentes del movimiento de Atenco la Ley sí se aplica con todo rigor: al líder Ignacio del Valle su condena es de 112 años en prisión, otros más obtienen penas de 67 años y de 32 años, en total 12 detenidos. Los violadores no fueron de ninguna forma incomodados por sus fechorías.

La impunidad adquiere otras consideraciones cuando se trata de funcionarios públicos de primer nivel. El caso de Luis Téllez o el del gobernador de Puebla, Mario Marín. Este último es vinculado a la explotación de menores. La periodista Lydia Cacho le denuncia, cuestión que le cuesta su aprensión y encarcelamiento en un proceso que no prospera y pronto se ve libre. Gracias a su labor caen empresarios y políticos como Jean Succar Kuri, Kamel Nacif y Miguel Ángel Yunes.

La Jornada publica la grabación de la conversación entre Mario Marín y su socio Succar Kuri donde se confabulan para “castigar” a la periodista Lydia Cacho. Irónicamente el llamado “gober precioso” termina su mandato sin afrontar cargos por su complicidad con los pederastas ligados al caso. Hoy se sabe que Mario Marín es uno de los 8 gobernadores priístas que apoyan a Calderón en su ascenso a la Presidencia de la República, lo que explica su trato de impunidad. En su proceso el magistrado Silva Meza dicta culpabilidad a Mario Marín pero la Suprema Corte de Justicia, el 29 de noviembre de 2007 lo exonera con 6 votos contra 4. Se afirma también que el PRI logra

concertaciones a favor de Mario Marín con el presidente de la República para que éste último goce del apoyo que requiere para promover su reforma energética.

Patenta todo lo anterior el desamparo de la nación mexicana ante sus autoridades al dar trato de impunidad a gobernantes y la subordinación de la justicia al Ejecutivo nacional. Destacables son la negación a todas las querellas contra la llamada Ley Televisa, las reformas a la Ley del ISSSTE, en la liquidación de la empresa paraestatal Luz y Fuerza del Centro, entre otras.

CAMPO, AGRARISMO, RURALIDAD Y POBREZA

La revolución mexicana da como resultado una constitución cuyas normas son el fundamento económico necesario para que el capitalismo moderno prospere.

Las instituciones económicas deben garantizar:

1. El reparto económico; esto es, la propiedad privada de los medios de producción (tierra, trabajo y capital).
2. El contrato social; las relaciones industriales, o relaciones obrero – patronales, las garantías individuales como sociales.
3. La distribución social del ingreso con base a las remuneraciones obtenidas por los dueños de los factores productivos según su cuota de contribución al valor social de la producción (rentas, alquileres, beneficios, intereses, sueldos y ganancias).
4. Establecer la organización social del trabajo y la producción como parte de una función social de producción donde se involucran los dueños de los factores productivos.

En los artículos constitucionales 27 y 123 quedan implícitamente resueltos estas cuatro garantías. En el artículo 27 se tratan las garantías 1 y 4, mientras que en el artículo 123 quedan establecidos las garantías 2 y 3.

Destacable es el tema del campo, que gracias a la revolución mexicana obtiene prebendas importantes en materia del reparto agrario, la reforma agraria que le dota de un trato más digno y garantías económicas como son los llamados precios de garantía al productor como al consumidor, se dota de financiamiento al campo como lo fue banrural, así como se establece CONASUPO para garantizar el abasto en productos básicos a la población.. Se subvenciona la economía y se crean subsidios a la producción agrícola.

Gracias a estas instituciones las organizaciones propias del sector primario de la economía crecen de manera sostenida de 1930 a 1970. 40 años de crecimiento cuya tasa media anual fue del 8%. El minifundismo de principio da buenos resultados, en lo social por la justicia del reparto basado en el ejido, y en lo económico con la autosuficiencia alimentaria.

Hay causas internas como externas para explicar el Milagro mexicano, como se le viene a llamar a este periodo. Internamente, la revolución da por resultado instituciones económicas capitalistas de corte moderno, las cuales son propias para la maduración del régimen de producción rígida. Viene el orden y la paz social lograda en la década de los años 30. El reparto agrario y la expansión de la producción agrícola. El crecimiento demográfico que expresa una transición con incrementos anuales crecientes desde 1936 en adelante. Un programa de nación bajo un único régimen de gobierno con disciplina e impostura: el PRI como proyecto político de nación.

En lo externo el periodo de entreguerra y la reconstrucción europea respectiva, que mantiene las exportaciones de bienes primarios y básico de nuestra economía a América del norte. Se viene la segunda contienda mundial que favorece aún más las ventas al exterior, así como el ulterior periodo de reconstrucción bajo el llamado Plan Marsahll (denominado oficialmente *European Recovery Program* o *ERP*). La expansión de la economía estadounidense en la posguerra beneficia grandemente a toda la región latinoamericana, en especial a la economía mexicana. Innegable es la atinada gestión de Eduardo Suárez, secretario de Hacienda durante las administraciones Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho.

No obstante en la década de los años 60 del siglo XX el capitalismo cambia. El ascenso del régimen de producción flexible mediante el renacimiento de Japón y los tigres de oriente resta rápidamente espacio económico a los Estados Unidos de América como a Inglaterra. Se crea en 1960 la Comunidad Económica Europea, que es una estrategia regional contra estadounidense, donde mediante una política de sustitución de importaciones norteamericanas viene a restar influencia a la Unión Americana en Europa. Finalmente, la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, la inflación en occidente repunta lo que redimensiona el comercio mundial a una escala más modesta.

Esto es lo que marca para 1971- 1973 el ocaso de la hegemonía norteamericana en la economía occidental capitalista, que es en sí el ocaso del régimen de producción rígida. Necesariamente la caída de ventas norteamericanas se traduce en la caída de las compras, por lo que las ventas al exterior de la economía mexicana desde 1971 se reducen y llevan no solo a un déficit comercial, sino al rápido agotamiento de las reservas internacionales, cuestión que lleva a la devaluación de casi un 100% de la moneda mexicana ante el dólar en 1976. Desde ese momento se inicia para la economía mexicana una fase de atonía y estancamiento.

El primero en resentir la crisis es el sector primario de la economía mexicana. En especial el campo. Ante la crisis agrícola y su efecto en la autosuficiencia alimentaria, en el sexenio de José López Portillo (1976 – 1982), se crea el Sistema Alimentario Mexicano (el SAM).

En 1976 se descubren los yacimientos de Cantarell en costas de Tabasco, una de las reservas de hidrocarburos más grandes del mundo. Luis Echeverría Álvarez de inmediato endeuda a la nación para crear la infraestructura extractiva necesaria para aprovechar esta riqueza natural. De 4 mil millones de dólares, que en 1970 era la deuda externa de la nación, pasa a 20 mil millones de dólares para 1976. Con José López Portillo, la deuda crece a cerca de los 60 mil millones de dólares, gastos de abuso y que no se aplicaron al fortalecimiento de la infraestructura productiva, sino al gasto público populista, en subsidios y subvenciones a la población en materia de educación, cultura, recreación y gastos administrativos superfluos.

La situación se traduce para 1980 en un sobre endeudamiento que obliga a la nación a pedir nuevos créditos a organismos internacionales multilaterales (FMI y BM), quienes imponen a las siguientes administraciones reglas duras en materia de gasto social (austeridad, como lo anuncia desde el principio de su gobierno Miguel De La Madrid Hurtado).

Vienen reformas institucionales precisamente a los artículos 27 y 123 constitucionales. Desaparecen los subsidios al campo como al salario, a los básicos, se termina el crédito público a los sectores considerados estratégicos, se redimensionan los programas públicos dirigidos a la asistencia a los grupos considerados vulnerables, como desaparecen otros programas sociales. Propiamente esto se viene dando en los años 90 del siglo XX. En esta década el campo mexicano queda quebrado y liquidado económicamente.

La reorientación económica marca una reorientación de vocación industrial. Se abandona al campo a cambio de fortalecer los sectores secundario y terciario de la economía, mismos que requieren un respaldo estatal ante la colocación de Inversión Extranjera Directa y la logística que requiere en materia de financiamiento interno, crédito, seguros, consultorías y otros servicios más.

La dependencia en materia alimentaria es marcada. El campo mexicano ya no produce para la mesa de los nacionales, sino del extranjero. Se siembra hortalizas de exportación y productos forrajeros para las ganaderías (precisamente de exportación). Contrario, el maíz, el frijol, la harina de trigo, son importados.

La pobreza creciente pronto desplaza en el plato del mexicano la carne de res y de pescado, por la de pollo y el huevo. La calidad de nutrimentos se degrada y la gran mayoría de familias en el país cada vez ven más racionada las proteínas, matando el hambre con carbohidratos.

Con la firma del TLCAN en 1994 se cancelan todas las subvenciones económicas a la producción, especialmente aquellos subsidios al campo. Mientras que en los Estados Unidos de América, es el campo precisamente el sector más subvencionado de su

economía. Las reglas no son solamente claras, sino injustas, inequitativas, desigualitarias.

El efecto del neoliberalismo en la era de la globalización para el campo en toda nación en vías de desarrollo son:

1. Término de las subvenciones a la producción agrícola.
2. Término de minifundio y amparo de la eficiencia productiva agrícola mediante la formación de latifundios.
3. Término de los mercados regionales de alimentos.
4. Eliminación de formas colectivas de producción agrícola, como en el caso mexicano: el ejido.
5. Término de precios de garantía al consumidor como al productor.
6. Enajenación de la producción agrícola a agronegocios de corte transnacional.

En estos agronegocios también destacan grandes corporativos nacionales como lo es MASECA, que controla toda la producción maicera del país. Los subsidios antes dados a los agricultores, ahora son dados a éstos agronegocios, por citar el caso: Gigante Verde, Pilgrim's Pride, Herdez, Nestlé, Cargill, Monsanto, Phillip Morris y Unilever. Se afirma que las importaciones agrícolas fueron crecientes (cada vez mayores) de 1990 al 2000.

En el campo ante la crisis que padece por la implementación de las políticas neoliberales, el único cultivo que prospera es el del narcotráfico. Se llega a afirmar que la tercera parte del campo mexicano para el año 2000 trabaja algún cultivo tal como la marihuana y la amapola.

Otro aspecto de este problema es el incremento de la emigración de campesinos a la Unión Americana. Actualmente, al año pasan el río bravo al menos 250 mil nacionales buscando oportunidades en la economía norteamericana. En la administración de Vicente Fox Quezada (el autoproclamado presidente del campo, 2000 – 2006), este tipo de migración representa 3.5 millones de personas.

Ahora bien, muchas de las importaciones agrícolas vienen bajo certificación, por lo que sus precios son muy altos para el consumidor nacional. El efecto de la liberación de precios agrícolas ante un mercado de competencia imperfecta es que la tendencia en los precios internacionales es al alza. Para el 2007 se da una crisis internacional en la proveeduría de bienes agrícolas, especialmente del maíz. Es este último producto destaca que su incremento también obedece a un aumento de la demanda al utilizarse como etanol, combustible. La autosuficiencia alimentaria queda como una utopía en la memoria nacional, en el 2008 el déficit comercial de alimentos del país es 2.5 veces mayor a la de dos años antes, la cual es de 5 mil millones de dólares. El espectro del hambre, antes erradicado, ahora recorre, como un fantasma, las calles del país.

En el 2008 entra en vigor el apartado del TLCAN relativo a la libre importación de maíz, trigo, frijol, sorgo y leche. Tiro de gracia al campo mexicano. Los costos sociales son muy altos:

1. Se pierden 2 millones de empleos en el campo.
2. Renace el latifundismo.
3. Los pequeños agricultores venden sus propiedades.
4. Aumenta la migración de trabajadores mexicanos a la Unión Americana.
5. La producción de alimentos en el país es insuficiente.
6. Crece la dependencia del exterior en lo alimentario.
7. De 2000 a 2011 las importaciones de alimentos representan compras al exterior de cerca de los 120 mil millones de dólares.
8. La mesa del mexicano se importa y en la producción de alimentos en México está destinada principalmente al exterior.

De la apertura económica es precisamente el campo el más perjudicado. Desde luego, la expresión sectorial es que son las ramas más tradicionales y básicas o de producción primaria, tales como la agricultura, la ganadería, la minería, la pesca, la recolección, principalmente, son las industrias que están en crisis. La expresión regional - territorial es que son los municipios de fuerte corte rural y rural-urbano, principalmente al sur del país los que sufren un crecimiento amainado y atónico.

LA IZQUIERDA EN MÉXICO

La izquierda en México tiene sus orígenes primero en la creación del Partido Comunista Mexicano en 1919. Se trata de un intento bolchevique en México por darle un derrotero hacia el socialismo a la revolución mexicana. Este partido desaparece en 1948 ante el temor de que los norteamericanos vieran en México una simpatía hacia el bloque soviético al inicio de la llamada guerra fría.

La revolución mexicana da término a los gobiernos liberales y da a las administraciones posrevolucionarias y toque de socialdemócratas. El Partido Nacional Revolucionario, el abuelo del PRI, creado en 1929 emblema una ideología de este corte. De hecho es durante las administraciones de Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho que el discurso político adquiere matizaciones socialistas.

Bajo la consigna revolucionaria el reparto agrario atiende a una ideología más socialista que demócrata. La fórmula corporativista que funda la plataforma del poder político se basa en el corporativismo de varias confederaciones nacionales donde quedan enajenados empresarios, obreros, campesinos, profesionistas, y todo tipo de organización popular mediante sindicatos, cámaras y colegios de profesionistas.

Es precisamente bajo la visión de Eduardo Suárez, economista responsable de la Secretaría de Hacienda en las administraciones de los presidentes Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho que la estrategia de México adquiere un enfoque endogenista, de sustitución de importaciones y de crecimiento basado en la demanda interna, con alto grado de proteccionismo del exterior y regido en materia de comercio por el bilateralismo. Las tesis keynesianas implícitas en las sugerencias norteamericanas propias del New Deal *roosevelthianas*, indican que el crecimiento debe partir de la expansión del gasto público.

En este contexto, se madura la ideología socialdemócrata que en un inicio aglutina a grupos populares tales como son los campesinos y los obreros, así como a la clase media del país, y logra un acuerdo mediante la CANACINTRA con la parte patronal. Se tiene mediante el PRI un proyecto de desarrollo nacional y sobre todo, un proyecto de nación incluyente.

El esquema endogenista es propio de un régimen de producción rígida donde la producción tiene un origen local, meramente nacional (*Made in...*). Es exitoso hasta los años 60, cuando arriba desde oriente un nuevo régimen basado en la producción flexible, también llamado toyotización. La nueva lógica de acumulación le da al traste a la modernidad y se inicia lo que ahora se conoce como postmodernidad. El esquema de autarquía endogenista se cuestiona ante la necesidad de abrir las economías para implementar la llamada producción compartida.

La necesidad de aminorar costos lleva como estrategia la relocalización a escala mundial de las distintas fases de los procesos productivos. Es por ello necesario dar fin al proteccionismo y al bilateralismo. La apertura económica de todas las naciones es la condición *sine qua non* para la nueva estrategia productiva.

Corresponde entonces que la ética de la administración pública adquiera matizaciones de tipo neoliberal, la que en México como en América latina corresponde a la ideología de la democracia cristiana, o derecha.

Más que izquierda en México se debe hablar de oposición. En la época del PRI la principal es la del PAN, entonces un partido conservador de centro derecha. En la actualidad la oposición es la del PRD y la del PRI, el primero de centro izquierda y el segundo de centro derecha.

A raíz de la crisis del fordismo iniciado en 1971, y del arribo de la derecha al poder mediante el PAN en el 2000, la oposición en México se matiza como izquierda. Izquierda socialdemócrata e izquierda socialista. El primer componente político en el país es la separación del PRI de los grupos cuyo ideal es el socialismo. Nace el Partido de la Revolución Democrática (PRD), compuesta de muchos grupos distintos cuyo ideal es coincidente pero de estrategias beligerantes distintas.

El PRD logra aunar las fuerzas de la izquierda en una sola propuesta política en los comicios de 1988 bajo el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas, no obstante el fraude electoral le quita el mérito de ascender al Ejecutivo nacional. Nuevamente para los comicios de 2006, bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, logra escalar

niveles de popularidad que bien ganan las elecciones o bien las dejan muy cerradas entre el PAN y el PRD. Su éxito es tan rotundo no obstante.

Este divisionismo de origen es lo que viene a fraccionar la izquierda en el país. Dado el poder que adquiere desde 1988 a 2006, iniciada la presente administración de Felipe Calderón Hinojosa, se inicia una estrategia de dismantelamiento de la plataforma de la que parte la alianza que respalda a AMLO, con la finalidad de que deje de ser la segunda fuerza política del país.

Nace la llamada “Nueva izquierda”, creada desde gobernación y cuyo líder es Jesús Ortega, mercenario político y abierto a la negociación. Su servilismo se ve desde inicio de la administración con los servicios que personas como Ruth Zavaleta prestan al nuevo régimen desde la cámara de diputados.

La Nueva Izquierda no es más que la infiltración del panismo dentro de la militancia del PRD. Un cáncer en el seno de la izquierda mexicana. Los esquirols conocidos como los “Chuchos” logran quitarle el poder al grupo de AMLO dentro del PRD en las elecciones internas del partido en 2008. Alejandro Encinas pierde ante Jesús Ortega quien queda como cabeza de esta alianza política.

Con la imposición de los “Chuchos” se fragua el dismantelamiento de las alianzas existentes entre tanta tribu que integra a la izquierda mexicana. Se debilitamiento queda patente en las recientes elecciones del estado de México para gobernador de dicha entidad, donde el PRD queda como segunda fuerza política ante el PRI quien le gana con abierta ventaja absoluta en votos.

No solo se trata de debilitar, dismantelar y controlar la izquierda en el país, lo que gobernación también busca es lograr controlar su voto dentro del Congreso de la Unión a favor de iniciativas tales como la reforma energética o a la ley federal del trabajo.

Los chuchos logran dividir al PRD y con ello se da la separación del partido con los simpatizantes de AMLO. Consideración importante que explica que para los comicios del 2012 ya se vislumbra que el PRD no logrará los comicios del 2006. Se distraen no solo simpatías, también recursos al movimiento lopezobradurista.

Se dan alianzas que son auténticas invocaciones al demonio. En las elecciones del 2010 se dieron alianzas entre el PRD y el PAN en varias entidades federativas, cuestión que resulta no solo indignante para la izquierda mexicana, sino un insulto a la razón.

La fragmentación de origen de las fuerzas que vitalizan a la izquierda del país ahora se ven mermadas gracias al desmantelamiento de la plataforma política de la que se valen las alianzas en los comicios. La izquierda desde el momento del arribo de los “chuchos” ya no representan un peligro a la derecha mexicana, incluso le son un recurso muy útil. Felipe Calderón Hinojosa se ha salido de nuevo con la suya.

REFORMA ENERGÉTICA, SOBERANÍA Y CRISIS

Intereses extranjero, especialmente norteamericanos, ven en los recursos nacionales de México potenciales recursos de explotación. Centrado en la mira está el petróleo. Concesiones que ya en 1906 había obtenido los norteamericanos por el entonces régimen de Porfirio Díaz y que en 1938 el presidente Lázaro Cárdenas les quita.

En 1991 se reforma la Ley para promover la inversión nacional y regular la inversión extranjera, por iniciativa de la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari. Abre muchos renglones de la actividad industrial a la inversión foránea, especialmente en tópicos considerados estratégicos para la soberanía nacional.

Desde 1976, con el descubrimiento de los yacimientos de Cantarell en las costas de Tabasco, las finanzas nacionales se petrolizan. Del erario público, ya para 1980, el 40% son ingresos obtenidos de las ventas de crudo en el exterior. Se crea una grave dependencia fiscal y financiera al respecto de este recurso, y deja vulnerable a la economía nacional ante las arbitrarias variaciones de su precio internacional. Las crisis de los años 80 del siglo XX (1983, 1985 y 1987) se explican principalmente por esta razón.

En la sujeción de la economía mexicana por la norteamericana, el tema nodal resulta su intromisión no solo en las decisiones públicas de la estrategia económica del país en su

desarrollo, sino en su propio manejo de recursos naturales, especialmente la energía y sus fuentes. En gran forma las reformas realizadas al artículo 27 constitucional a fines de 1991 e inicios de 1992 obedecen a abrir más posibilidades de aprovechamiento del suelo como del subsuelo, tanto a la inversión nacional como a la extranjera (especialmente esta última).

Pero las reformas se quedaron cortas ante los deseos estadounidenses de explotar los yacimientos de hidrocarburos ubicados en el territorio nacional (continental como litoral). La oposición no permite reformas a la altura de sus ambiciones y a la fecha les quedan chicas.

El 08 de abril de 2008, el presidente Felipe Calderón Hinojosa presenta una iniciativa de reforma energética ante el Senado de la República. Lo que se maneja no es privatizar, sino modernizar el sector, aunque esa modernización encubre el deseo de privatizar ductos, la extracción del petróleo, su almacenamiento, transporte, principalmente. Aquí no se trata de privatizar la infraestructura productiva de PEMEX, sino el recurso: el petróleo.

La designación como Secretario de Gobernación de Juan Camilo Mouriño se explica al considerársele como principal operador de las empresas europeas, especialmente españolas y las de su familia, en el debido manejo y orientación de las reformas energéticas emprendidas por la administración del Calderón Hinojosa.

La iniciativa se da en un momento no oportuno para la economía nacional, siendo que su dependencia financiera del hidrocarburo se torna delicada ante la crisis *subprime* de septiembre de 2008 surgida en la Unión Americana.

Internamente se velan situaciones de corrupción hacia dentro de la propia paraestatal PEMEX. Camilo Mouriño da concesiones a su propia familia por más de 100 millones de pesos mediante 108 contratos (Auditoría Superior de la Federación).

Las concertaciones entre el PAN y el PRI son la plataforma de la cual el presidente Felipe Calderón Hinojosa parte para garantizar prospere en el Senado su iniciativa. Se vienen movilizaciones sociales de gran magnitud lideradas por la oposición,

especialmente de izquierda, Andrés Manuel López Obrador es el principal movilizador de esta respuesta a la posible privatización del petróleo. Legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) paran en seco la iniciativa mediante la toma de la tribuna legislativa al declararse en huelga.

Gracias a ello, de las 13 iniciativas que compone la reforma energética, 8 son canceladas, especialmente las respectivas que tocan la privatización de ductos, en materia de refinación, principalmente. No obstante, la neocorrupción propia de los regímenes de ultraderecha en México, redacta la reforma de tal manera que le deja lo que la prensa nacional vino a llamar “rendijas legislativas” donde, mediante una redacción tramposa, confusa, subrepticia, se abren posibilidades para la privatización promovida por el régimen en materia de energía.

En el seno de estas “rendijas legislativas” se dan 355 contratos entre PEMEX y empresas transnacionales tales como REPSOL, SCHLUMBERGER y HALLIBURTON.

La subrepticia redacción de las leyes abren huecos favorables para interpretaciones convenientes a intereses de muchos tipos, lo que permite las maniobras de privatización. *Trampas del derecho para irnos por la derecha*, considera la prensa escrita.

Mientras el artículo 27 constitucional prohíbe que empresas no nacionales exploten los recursos del subsuelo, con las reformas y sus diversas interpretaciones tramposas, se permite que empresas privadas nacionales como extranjeras exploren como exploten los recursos del subsuelo, toca también a la minería.

Se crean empresas filiales a PEMEX con participación de capital nacional como extranjero para dicho fin, asociadas desde luego a las transnacionales extranjeras de las que destacan precisamente REPSOL, SCHLUMBERGER y HALLIBURTON. Los contratos son llamados de invitación restringida y por adjudicación directa...”. PEMEX dice a quienes beneficia en licitaciones directas con estas empresas u otras posibles.

Los yacimientos superficiales del país ahora se consideran solo duran para 5 años más ante la actual extracción del crudo, pero los yacimientos profundos son muy ricos y

alientan expectativas de al menos 30 años más de extracción. Las potencialidades de hecho son enormes y ponen en materia a México a la altura de Venezuela, la nación de la región más rica actualmente en reservas comprobadas de hidrocarburos.

FASCISMO Y PRIVATIZACIONES

Para avanzar en la privatización de la energía en México, la liquidación de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LyFC) obedece a una estrategia de debilitar a las fuerzas opositoras: el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Las empresas directamente afectadas por el interés de privatizar este ramo de la actividad económica, considerado estratégico para el desarrollo y la autonomía nacional son PEMEX, CFE y LyFC. Necesariamente las fuerzas opositoras a la privatización son sus sindicatos.

El ardid del Ejecutivo nacional para justificar el cierre de la paraestatal LyFC y la liquidación de sus trabajadores es que operaba con déficit (40 mil millones de pesos). Tratándose de una empresa del estado, los subsidios que otorga a sectores y ramos económicos (privilegios de hecho), explican esta situación. Empresas como American Expres, Televisa, Televisión Azteca, Bimbo, Aurrerá, empresas editoriales como Reforma o Unomasuno gozan del no pagar un centavo en energía eléctrica.

El déficit de la paraestatal es subsanado por el Estado, mediante el uso de los impuestos de los ciudadanos. Dinero que debe ir a los niveles socioeconómicos más humildes de la población del país, pero para estos parias las subvenciones desaparecen y son trasladadas a beneficiar a los empresarios más ricos del país.

La estrategia para justificar la privatización de la empresa es primero desprestigiándola. Exhibiendo sus “malas” finanzas y culpando a los trabajadores y sus sindicatos de ser los causales de esta desdicha, por sus altos sueldos y abusos. En promedio en el 2008 los trabajadores de LyFC es de 6 mil pesos mensuales. Similar estrategia sigue el Estado mexicano con el IMSS y su sindicato.

Los sindicatos en México son la principal fuerza opositora de las políticas neoliberales. De hecho ante la apertura del TLCAN el 1º. de enero de 1994, estalla el movimiento zapatista en Chiapas, de donde proviene a la fecha el 40% de la energía eléctrica que se produce en el país, que incluso provee a varias naciones centroamericanas de energía, y cuyo financiamiento estuvo ligado a los sindicatos corporativos del PRI, como el de petróleos mexicanos, el de la ahora empresa extinta Ruta 100, entre otros.

La beligerancia del SME hizo que en 1999 no lograra la privatización de la energía eléctrica reformando la constitución, como pretendió. Se opuso a la firma de contratos privados de proveedores de energía eléctrica alternos a la CFE y de LyFC. Abiertamente el SME vino a apoyar en el 2006 la candidatura del Andrés Manuel López Obrador, dado que en su proyecto político no se contempla la privatización del sector.

Las elecciones internas del SME dadas en el 2009 son saboteadas desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Pública, que no permiten tomar protesta a su legítimo líder Martín Esparza. Se requiere un títere controlado desde gobernación para los fines que persigue el Ejecutivo nacional.

Finalmente la liquidación de la empresa paraestatal sucede el 11 de octubre de 2009, atribuyendo la causa a la “mala” situación financiera y por “costarle” al estado al año 40 mil millones de pesos. Débito causado por las subvenciones que el Estado otorga a los grandes grupos empresariales del centro del país. 55 mil trabajadores se quedan sin su empleo, nada menos que en medio de la crisis subprime suscitada en los Estados Unidos de América un año antes. La extinción de la empresa se hace fuera de la ley. Otra expresión del fascismo del Estado mexicano. Estaban de por medio los artículos 14, 73 y 161 constitucionales.

Pero más allá de la estrategia de privatización mediante el desprestigio de las paraestatales y sus sindicatos, y que estos últimos les son sediciosos al Estado, también entran los intereses de los empresarios. La creación de redes de fibra óptica y el uso de las instalaciones y redes tendidas de la paraestatal, son su principal móvil. El llamado *triple play* es una cable por donde se puede transmitir el Internet, el teléfono y la televisión. LyFC tiene un tendido de esta fibra de 1,100 kilómetros. La CFE cuenta con otros 30,000. Este negocio se estima actualmente en 7 mil millones de dólares.

En conclusión, con la desaparición de LyFC, el Estado mexicano da un paso adelante a la privatización de la energía eléctrica, abre posibilidades muy atractivas y rentables a la iniciativa privada para el desarrollo de la tecnología – negocio basado en la fibra óptica, debilita en gran medida a una de las fuerzas opositoras y sediciosa al régimen: el SME, y termina con un contrato colectivo cuya dimensión allana el camino para la reforma laboral.

Las consecuencias sociales son diversas, considerando que las instalaciones de la paraestatal eran obsoletas, su mantenimiento y funcionalidad óptica es un mérito de la pericia de sus trabajadores. A la hora que se despide a estas personas y pasan a trabajadores de la CFE no familiarizados con la infraestructura que heredan, las fallas y apagones por todo el DF y el Estado de México empiezan a ser más frecuentes.

El Ejecutivo nacional habla del un boicot a las instalaciones por parte del SME, pero en realidad estos siniestros son inminente efecto de una abrupta e inmediata liquidación de 55 mil trabajadores cuya pericia no es nada despreciable y mantiene por décadas de obsolescencia infraestructural la proveeduría de la energía eléctrica a la población del centro del país.

El mayor siniestro se da el 04 de febrero de 2010, la inundación de aguas negras en el Valle de México se explica porque falla la provisión de energía en las instalaciones Madero y Xalostoc que dejan sin energía al cárcamo del Río de los Remedios. No hay como bombear el agua. En Chalco falla la subestación Ayotla, que causa lo mismo para el canal de la Compañía y se desborda. Viene en Iztapalapa a suceder lo mismo con las subestaciones Santa Cruz e Iztapalapa, se desborda el drenaje profundo y de su cárcamo. El resultado es la inundación de aguas negras del Valle de México. Similar al siniestro del desborde de presas en Tabasco y el desbordamiento del río Grijalva pocos años atrás, donde las inundaciones damnificaron a miles de familias del sur de Veracruz y de Tabasco, especialmente en Villahermosa. Inundaciones ligadas a una mala administración de las presas que nutren las hidroeléctricas por parte de las autoridades que promovía desabasto para introducir contratos privados. Las presas se sobrellenaron al estar literalmente cerradas sus compuertas para no alimentar a las hidroeléctricas, y

de abrupto fueron vaciadas sin considerar que el gran causal de agua iba a causar una gran tragedia a la población vecina.

MUERTE, TERROR Y ESTADO

La muerte de la indígena Ernestina Ascensio a efectos de una brutal violación, y la versión de las autoridades de haber sido una muerte causada por gastritis, deja en claro el grado de manipulación que gobernación da a la información que desea sea el saber popular de los acontecimientos nacionales.

Las ciudades de la frontera norte del país son las más violentas, dejando atrás al Distrito Federal en materia de inseguridad pública, que por décadas es considerada la urbe más peligrosa. Ciudad Juárez de 2008 a 2010 crece 10 veces en materia de violencia. Tijuana en el mismo periodo aumenta en 8 veces. Y por las mismas proporciones están otras más de las principales ciudades fronterizas del norte del territorio nacional.

México encabeza a nivel mundial ser el país donde más hay periodistas asesinados. De 2003 a 2011 superan los 60. Por las mismas cifras están los defensores de los derechos humanos y líderes de movimientos sociales, tema que se abre con el asesinato de Digna Ochoa y Plácido el 19 de octubre 2001, considerado el primer crimen de la derecha en México, a efecto de defender a campesinos ecologistas y atentar contra empresarios dueños de aserraderos en Michoacán.

Toda la violencia desatada parte del combate al crimen organizado, especialmente de la guerra fratricida contra el narcotráfico. Mientras la droga no logra salir al su principal mercado, los Estados Unidos de América, se canaliza al mercado nacional el consumo de la misma, así el consumo en el país de enervantes y estupefacientes sube de solo 4 años en un 60%.

El terrorismo por parte de este tipo de criminales aparece como parte de las vivencias nacionales, el evento que marca el inicio del su beligerancia se da el 16 de septiembre de 2008, en la ciudad de Morelia Michoacán, en plenos festejos patrios con el estallido de una granada que mata a 8 personas y deja heridos a 85 más. En la necesidad de que

este hecho ante la opinión pública no quede impune, se “inventan culpables” y hay arrestos de lo que posteriormente se vuelve una costumbre de las autoridades: inventar chivos expiatorios.

Están otros crímenes como la matanza de Salvácar en Ciudad Juárez donde son asesinados 14 estudiantes quienes festejaban un acto deportivo. Acto que se atribuye al crimen organizado y que la finalidad es crear terror entre la población ante la caída de inocentes. Estrategia que le da a los delincuentes una gran ventaja ante el Gobierno al volcarlo en contra al propio pueblo quien no quiere verse como “daño colateral” en esta guerra contra el narcotráfico.

En este acto criminal el Presidente como la Secretaría de Gobernación afirman tratarse de ajustes entre criminales, cuestión por la cual posteriormente debe ofrecer a los padres de los laudos una disculpa y donde es increpado por los mismos ante la “insensibilidad” de un discurso oficial que da por hecho que todas las víctimas son criminales. Es entonces que se empieza a hablar, y a admitir, “los daños colaterales”. No sin considerárseles costos admisibles e inevitables en el acto de ejercer un buen gobierno y mantener el estado de derecho.

Similar al caso del siniestro ocurrido al funcionario Ramón Martín Huerta y otros de sus acompañantes el 25 de septiembre de 2005, en 2008 el avión donde viaja en entonces Secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, José Luis Santiago Vasconcelos, extitular de la SIEDO y otras personalidades más, se estrella en plana zona residencial de la ciudad de México. Ambos siniestros que se presentan como accidentes pero que bien se habla de golpes dados al Estado por grupos criminales. Anabel Hernández, en su libro “Fin de fiesta en Los Pinos” afirma que la muerte de Ramón Martín Huerta fue por causa de tener acorralados a los hijos de Martha María Sahagún Jiménez en las transacciones a costillas del poder que documenta la periodista en su texto.

Las ejecuciones a 5 años de la administración calderonista suman más de 40 mil. Tan solo en el 2009 son de 7,724. Urbes como ciudad Juárez que en el año 2000 son consideradas seguras y prósperas dentro de los parámetros de crecimiento de los esquemas neoliberales, en el 2010 se tiene como la ciudad con más violencia en el país y con mayor índice de criminalidad (130 muertes por causa violenta por cada 1000

habitantes). La prosperidad no se ampara ante 120 mil negocios cerrados, el crecimiento de la extorsión a la población y una emigración de más de 100 mil personas en los últimos 5 años. De las muertas de Juárez ni hablar, tema que ahora palidece ante las nuevas cifras de impunidad y ejecuciones referentes a “los muertos más allá de Juárez”, de mexicanos ejecutados en los Estados Unidos de América por grupos criminales, tanto relacionados al narco, como de intolerancia racial y cultural.

El 15 de mayo de 2010 Diego Fernández de Ceballos es secuestrado en su propio rancho en el estado de Querétaro. El 28 de junio cae el candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas Rodolfo Torre. Cada mes desde el 2008 cae un edil de algún municipio del país en manos de sicarios del crimen organizado. Crímenes dirigidos a políticos como a administradores públicos le dicen al Ejecutivo nacional que nadie está a salvo del largo brazo de este tipo de criminales.

Aunque el discurso oficial se jacta de irle ganando la guerra al crimen organizado, la situación de violencia generalizada en el país le pone en entredicho, y la impresión a nivel popular es que son los criminales que se han infiltrado en lo más íntimo de las esferas del poder quienes realmente llevan la batuta. Destaca la impunidad con la que cuenta desde la administración de Vicente Fox Quezada uno de los criminales más buscados en el mundo, el Chapo Guzmán.

El caso de Paulette Gebara Farah en el 2010 deja al descubierto a la opinión pública la impunidad con la que puede gozarse si se tienen los medios para comprarla. La incapacidad de las autoridades en resolver este crimen por intereses “encubiertos” vela la corrupción prevaleciente en el poder judicial como en la administración de la justicia.

Se citan otros casos de impunidad pactada como es el caso de Susana Chávez, activista de Ciudad Juárez, o el de Josefina Reyes Salazar, otra activista que es liquidada frente al propio palacio de gobierno de Chihuahua. Recientemente sale una película – documental “Presunto culpable” donde se presenta un caso donde a un inocente se le hace “chivo expiatorio” de un sistema que busca culpables para allanar las estadísticas de impunidad del país, caso que es tipificable sin duda miles más en todo el país. También están en la misma línea las aprensiones de mujeres cuya culpa es haber perdido el producto de su embarazo involuntariamente al tratarse de jornaleras, cuyos

trabajos de gran esfuerzo físico explican sus abortos; esto en el estado neoconservador de Guanajuato, bajo el gobierno del Yunque desde el año 2000.

MÓVILES SATÁNICOS

El combate al crimen organizado se encona principalmente a la supuesta guerra contra el narcotráfico. Pero esta se da a nivel burreros y capos y no se toca las élites del lavado de dinero. Lavado que se hace desde muchos negocios de todo tipo pero principalmente a escala de banca, aseguradoras, hipotecarias y grupos de asesoría o consultoría. Resulta ser que el lavado de dinero dispone a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) ingresos adicionales. A la hora de convertir el dinero de origen “malo” en aparentemente ingresos de negocios legales, notifican a Hacienda por lo que pagan impuestos, contribuyen. Es por eso que este rubro no es concebido en la “guerra contra el narcotráfico”.

El narco compite con las ventas manufactureras al exterior, con la captación de divisas por turismo, por inversión extranjera directa, las ventas de petróleo y con las remesas familiares como una de las 4 principales fuentes de divisas del país. Se afirma que anualmente el monto de captación de divisas por narcotráfico como mínimo llega a los 20 mil millones de dólares. Recientemente se sabe que este monto llega a superar los 30 mil millones de dólares anuales. De los cuales la mitad se lava mediante la banca. Si bien el narcotráfico es causa de violencia en el país, aporta ingresos al Estado que son parte de su estabilidad financiera. Similar a las ventas por petróleo, que aportan el 40% de los ingresos del Estado, este ramo de actividad económica ilícita vía lavado de dinero aporta el 20% de los ingresos de la SHyCP.

Se afirma por otra parte que esta actividad, sus empresarios, son parte de quienes financian las elecciones y su aporte es sustancial para las campañas proselitistas. Ya se cita su contribución disfrazada o encubierta en “Amigos de Fox”, con Lino Korrodi que posteriormente se le ha vinculado a negocios turbios ligados al lavado de dinero.

La Banca mexicana para su estabilidad financiera requiere manejar montos superiores a los 160 mil millones de dólares al año. Tan solo el salvamento bancario de 1994 es de

100 mil millones de dólares. En la más modesta de las consideraciones, el lavado del dinero aporta a la estabilidad financiera del país aproximadamente la sexta parte de los fondos requeridos.

El combate al narcotráfico hace de la droga un producto de lujo cuyo precio se eleva conforme aumenta el riesgo en su distribución. Por dar un dato, en los antros del país, una “grapa” que contiene una línea de cocaína se vende en el 2006 a \$150. En el 2011 está a \$350. Sin discriminar una inflación acumulada de aproximadamente el 16%, el aumento del precio se explica precisamente por el combate que hay en torno a la distribución de este tipo de mercancía.

La guerra contra el narcotráfico, si bien a violentado a la sociedad mexicana y trae consigo altos niveles de inseguridad y violencia, ha incrementado los ingresos de Hacienda por lavado de dinero, como los fondos bancarios que provienen del lavado de dinero, contribuyendo a la estabilidad económica del país.

Por otra parte, los capos comprar impunidad al financiar campañas de políticos. Se cita mucho el caso del Chapo Guzmán quien aporta, según lo afirma Anabel Hernández en su libro “Los señores del narco”, a las campañas presidenciales de Vicente Fox Quezada como de Felipe Calderón Hinojosa, principalmente, sin dejar de lado sus posibles patrocinios a candidaturas de diputados y senadores, ediles, principalmente.

Hasta el momento no han caído funcionarios, empresarios y ejecutivos vinculados al lavado del dinero. Pareciera que este tópico no existe en el crimen organizado del país. Más allá de ciertas venganzas políticas de gobernantes y políticos no alineados al régimen, como es el caso del ex gobernador de Quintana Roo Manuel Villanueva Madrid, o Jorge Hank Rhon, ex presidente municipal de Tijuana.

A gobiernos como el de Tamaulipas de Luis Alonso Mejía (del PAN), de Durango de Ismael González Deras, Fidel Herrera de Veracruz, Bours en Sonora, entre otros, se les cita como personas vinculadas a las redes de narcotráfico, sin dejar de lado el de Mario Marín, ex gobernador de Puebla vinculado a empresarios corruptos explotadores de menores.

Se afirma que muchos de estos políticos y gobernantes gozan de impunidad por su apoyo a la Presidencia de la República, apoyo muchas veces desde tiempos de la campaña a la presidencia en 2006.

El empresario de origen chino naturalizado mexicano, Zhenli Ye Gon, a quien se le condena por el tráfico ilegal de metanfetamina dirigido desde el territorio nacional a los Estados Unidos de América, afirma que aportó a la campaña de Felipe Calderón Hinojosa millones de dólares a través de Javier Lozano Alarcón. Es aún famosa la frase entre la población de “coopelas o cuello”.

Anabel Hernández documenta sobre el enriquecimiento inexplicable y de súbito de Genaro García Luna, titular de Seguridad Pública, el cual explica por sus nexos con el crimen organizado.

La guerra entre cárteles es efecto de sus intereses al amparo del poder político y financiero. Al parecer el control de estos grupos los mantiene el Ejército mexicano y el Cártel de Sinaloa encabezado Joaquín Guzmán Loera (El Chapo). Considerado uno de los criminales más buscados del mundo.

Este cártel provee de droga a 47 países y es el principal proveedor de Estados Unidos de América, según lo afirma el investigador del ITAM Andrés Roemer y Eduardo Buscaglia en su libro Terrorismo y delincuencia organizada (un enfoque de derecho y economía).

El negocio del narcotráfico en México es tan importante que el 90% de la droga que ingresa a la Unión Americana proviene de los cárteles que operan en México. El cártel de Sinaloa introduce el 50% de la cocaína que circula en los Estados Unidos.

Al parecer el cártel de Sinaloa goza de protección del gobierno mexicano puesto que solo el 12% de los narcotraficantes capturados (cerca de 74 mil personas), pertenecen a éste cártel. Se afirma que la fuga del Chapo Guzmán del penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco, el 20 de enero de 2001 fue previa negociación con el gobierno de Vicente Fox Quezada. Se volvió el principal operador del Gobierno para el control del narcotráfico en el país.

CRISIS ECONÓMICA ACTUAL EN MÉXICO

Desde el inicio del sexenio de Vicente Fox Quezada se abandonan en México las políticas inflacionarias basadas en la creación de dinero para sostener el empleo. Desde Luis Echeverría Álvarez (1970 – 1976), los gobiernos priístas sostuvieron el incremento del circulante para generar más de un millón doscientos mil empleos por año. Para ello, quienes percibía un salario veían caer su poder adquisitivo a cambio de que se creara empleo para los nuevos mexicanos (población de 12 años o más considerados como población en edad de trabajar), que se adicionan año con año al mercado laboral.

Se trata de un esquema que abre oportunidades modestas a las nuevas generaciones restando prosperidad a las generaciones mayores: inflación. La misma es considerada como el costo del crecimiento económico puesto que por otra parte se mantenía tasas de crecimiento superiores al crecimiento demográfico.

Para que se creen los nuevos empleos para las generaciones jóvenes, las anteriores ya con empleo deben renunciar a su poder adquisitivo propio de su salario real. Un esquema que socializa la responsabilidad del bienestar. Sin embargo, ante un crecimiento demográfico cercano al 4% anual en los años 70 del siglo XX, las tasas inflacionarias resultan muy altas y empobrecen rápidamente a las familias, aún con empleo pero con un salario real que se empobrece de forma continua.

Para el año 2000 la tasa de crecimiento demográfico a nivel nacional es menor al 1% no obstante el salario real es ya tan paupérrimo que no es sostenible mantener la misma política de socializar el bienestar mediante la creación de nuevos empleos con base a la generación de dinero (inflación). En el 2000, bajo la óptica de un nuevo gobierno de corte político distinto, el PAN, se implementan las llamadas políticas económicas de estabilización, las que parten de un criterio contrario: prácticamente indizar la tasa de creación de nuevo dinero a la del crecimiento de la PIB real, así los precios de los bienes se mantiene estables. Ventaja, la estabilidad y la recuperación del salario ante el incremento de la productividad en las empresas; desventaja, una modesta creación de

nuevos empleos que se basa en el natural crecimiento industrial, la que no da cabida a la población de sobra que no alcanza a emplearse.

La estabilidad tiene sus ventajas: ante la baja inflación nominal las tasas de interés nominales tienden a bajar a niveles que admiten mayor contratación de crédito, lo que lenta pero de forma sostenida mantienen el crecimiento industrial y del empleo que a largo plazo puede llegar a tasas equivalentes a las demandadas por el crecimiento demográfico. Los créditos a su vez se hacen más viables y redituables. Se aplazan sus criterios de pago logrando lapsos mucho mayores que prorratan en mayor número de pagos los compromisos a cuotas unitarias muy baratas, al estilo de “los aboneros”.

Para quienes ya tienen trabajo la estabilidad les implica una mayor prosperidad, a menores tasas de inflación mejor calidad de vida a futuro. Pero para quien no tiene trabajo prácticamente está de sobre en el país. Es por ello que las tasas de emigración de trabajadores a la Unión Americana crecen sustancialmente desde el 2000. Paralelo y efecto concomitante es el crecimiento inusitado de las remesas familiares que llegaron a estar cerca de los 30 mil millones de pesos anuales, más que las divisas obtenidas por ventas de petróleo al extranjero.

El desempleo creciente por otra parte lleva al incremento de la inseguridad, el crimen y la violencia en todo el país. El crimen organizado, desde la década de los años 90, antes de la propia implementación de las políticas de estabilización, ya se escala a una dimensión socialmente inadmisibles. Y las políticas de estabilización resultan un catalizador en el aumento de este tipo de problemas sociales.

El autonombrado presidente del empleo, Felipe Calderón Hinojosa, no está en posibilidades desde la ética de sus propios juicios de política económica de crear el empleo prometido. El desempleo crece de forma sostenida de la forma siguiente:

Tasa de desempleo nacional en febrero de 2006: 3.6%

Tasa de desempleo nacional en febrero de 2007: 4.0%

Tasa de desempleo nacional en febrero de 2008: 4.5%

Tasa de desempleo nacional en febrero de 2009: 5.0%

Tasa de desempleo nacional en febrero de 2010: 5.9%

Tasa de desempleo nacional en febrero de 2011: 6.6%

Tasa de desempleo nacional para febrero de 2012: 7.2% (estimada).

En lo que va del sexenio de Felipe Calderón el desempleo en monto suma más de 1 millón 600 mil desempleados.

Aparte del desempleo, aparece el subempleo. Para el 2010 el 58% de las personas ocupadas están en calidad de subempleadas (con menos de 30 horas de trabajo a la semana). Para el 2011 esta razón aumenta al 62%. Paralelo a esto la IMSS pierde derechohabientes y baja su tasa de inscripción al Instituto. Contrario, el seguro popular crece vertiginosamente. Los trabajadores que ahora no gozan con el Seguro social, recurren a contratarse ellos mismos el Seguro popular. Su incremento se presenta como un éxito de un programa social, pero en realidad es efecto de un problema y síntoma de una crisis del empleo y la propia seguridad social.

El salario nominal crece indizado a la inflación desde 1965, pero la forma de calcular el índice nacional de precios al consumidor es ahora tramposa. Antes más de 2 mil productos integran la canasta básica y este índice se calcula con base a la variación mensual de sus precios, y dándoles un peso ponderado por su consumo en la mesa del trabajador. Ahora el número de productos que integran la canasta básica es de mil y su promedio en variación mensual de precios no es ponderado. Gracias a ello, el valor resultando es menor al real. Así, si los incrementos al salario nominal son menores a la tasa nominal de inflación lo que se tiene es un detrimento del salario real (poder adquisitivo).

Mientras el salario mínimo de 2006 a 2009 sube 12.59%, los precios promedio de la canasta básica para el mismo periodo lo hacen en un 73.02%. Representa una pérdida del poder adquisitivo del 30% aproximadamente.

La crisis *subprime* surgida en septiembre de 2008 en los Estados Unidos de América aporta su grano de arena al problema. Al implementar Norteamérica el modelo neoliberal en su propia nación, paralelo a que sus negocios implementan el régimen de producción flexible, el aumento del desempleo y del subempleo es una constante en su economía desde los años 90. Una burbuja que crece y que pone a temblar las hipotecas

de los negocios inmobiliarios ante la pérdida de salario de los trabajadores estadounidenses, quienes pasan de un pleno empleo a subempleo o abiertamente a desempleo, al llevarse el trabajo a otras latitudes. La crisis hipotecaria termina por afectar a las aseguradoras y con ello a todo el sistema financiero norteamericano. La posmodernidad se deja sentir en lo social con una profunda crisis económica que cimbra las bases teóricas de los planteamientos neoliberales, como nuevo paradigma económico.

En 2008, ante el temor a la crisis se fugan casi 20 mil millones de dólares de la economía mexicana. La devaluación del peso ante el dólar es de 40% y la inflación repunta a una tasa mayor anual del 6%. Crece el desempleo y el crecimiento del PIB real.

Para sostener la estabilidad en ese mismo año la nación toma de sus reservas extranjeras una cantidad de aproximadamente 8 mil millones de dólares, para ello se abren nuevas líneas de crédito tanto de la Reserva Federal estadounidense, como del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Dinero que a la fecha viene ingresando al país otorgando el blindaje financiero derivado de la crisis del 2008 como necesario para ganar las elecciones del 2012. Es por ello que incluso la paridad del peso ante el dólar ha mejorado, siendo que a la venta el dólar se llega a cotizar a \$13 y actualmente está por debajo de lo \$12 por dólar. La deuda externa contraparte crece sostenidamente. Si algo se hizo bien en el sexenio de Vicente Fox Quezada es disminuir la deuda externa del país, cosa que ahora se pierde con el gobierno de Felipe Calderón.

Gracias a la guerra contra el narcotráfico el ingreso de divisas por este rubro aumenta de forma sustancial, e gobierno se preocupa porque prosperen los negocios de lavado de dinero y la banca es la más beneficiada de esta situación. Dólares extra se obtienen de la recuperación del precio internacional del petróleo y del aumento de las remesas familiares. Las cargas fiscales aumentan gracias a la invención del IETU que deja sin deducibles prácticamente a todos los contribuyentes del país, menos a los más ricos a los que tiene exentos de carga fiscal, aparte del incremento en los precios de los servicios públicos como el gas y la energía eléctrica, y el constante aumento de las gasolinas y el diesel.

La elecciones de 2009 son un escenario que obligan a la administración pública en procurar mantener una estabilidad a costa de lo que sea, para ello se recurre al endeudamiento externo y se canalizan gran parte de los recursos a programas sociales propios del clientelismo del Estado mexicano, desde épocas del PRI.

México es una de las economías de la región latinoamericana que crece con tasas más bajas. Naciones como Panamá, Brasil, Argentina, Venezuela y Uruguay muestran tasas de crecimiento anual de su PIB muy superiores. De hecho en el 2009 el INEGI admite que la economía mexicana decrece en un 6.5%, lo que se come la ganancia del crecimiento de años anteriores de la presente administración.

VULNERABILIDAD Y SALUD, COSTO NEOLIBERAL

El 23 de abril de 2009 se presenta en México el primer caso de influenza humana AH1N1. Con el precedente de la gripe aviar que causó estragos terribles en naciones de oriente, principalmente China, las autoridades mexicanas extremaron precauciones ante la ignorancia de no conocer el grado de peligrosidad de esta nueva calamidad.

Lo interesante es que esta pandemia pone en evidencia la fragilidad e inoperancia del sistema de salud prevaleciente en México. El ISSSTE desde la privatización de las pensiones entra en abierta crisis ante la pérdida de sustento financiero. Los recortes que previamente al 2009 se dan a los presupuestos de la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE. Los aumentos dados a la Secretaría de salud se destinan a la creación del Seguro Popular. Ninguna instancia en el país está, a la fecha, preparada para una pandemia, todo se enfoca a la atención individual de los derechohabientes.

Ante los recortes de presupuesto y el sistemático dismantelamiento del sistema nacional de salud llevado a cabo tanto por la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León, de Vicente Fox Quezada y de Felipe Calderón Hinojosa cancelan el sistema nacional de vigilancia epistemológica. La vulnerabilidad es desde entonces grave y significativa.

Con el ex presidente Ernesto Zedillo se cierra el Instituto Nacional de Higiene y el Instituto Nacional de virología. Con Vicente Fox se cierra también los Laboratorios de

Biológicos y Reactivos de México. Con Felipe Calderón se reduce hasta en un 5% el presupuesto destinado a la vigilancia.

Han prosperado recientemente granjas de aves y puercos en todo el país, que son cárnicos de exportación cuya oportunidad ante el TLCAN resultan negocios muy rentables. Su supervisión en términos del manejo de la higiene es cuestionable por parte del Estado, no tanto al respecto del trato del animal y su espacio, sino respecto a sus desechos. La empresa Smithfield instala Granjas Carrol en el municipio de La Gloria, en Veracruz. Desde el 2008 la comunidad de este municipio realiza paros y protestas ante las emisiones contaminantes de esta empresa, entre ellas la presencia no endémica de enfermedades. El 09 de marzo de 2009 alrededor de 600 habitantes muestran enfermedades en las vías respiratorias. En el mismo mes la OMS pide al gobierno mexicano información al respecto del brote de estas enfermedades.

El primer caso de AH1N1 fue el de un niño de esta comunidad, quien milagrosamente se salva, de ahí que la prensa le llamó el niño milagro. De diciembre de 2008 a abril de 2009 la diseminación del virus ya toma dimensiones a nivel nacional, propiamente se trata de una pandemia.

Se identifica el virus de influenza humana hasta el 23 de abril del 2008 por parte de la OMS y obliga al gobierno mexicano a tomar en serio el problema. El entonces titular de la Secretaría de Salud, José Córdoba Villalobos decreta la alerta sanitaria y paro nacional de clases, labores como actos masivos. Si desde que se detecta el primer brote de este virus en la comunidad La Gloria y se toman medidas emergentes, la enfermedad no hubiera escalado la dimensión de una pandemia. Pero aquí se ve evidente la vulnerabilidad epidemiológica del país ante la carencia de un sistema de vigilancia sanitaria efectiva y con cobertura.

Por suerte la sepa del mal resulta ser menos fatal de lo que se imaginaba. No obstante si hubo muertes. Quienes perecieron fueron predominantemente personas de bajos recursos quienes carecían de una atención o programa de salud por no tener un trabajo o trabajar en el sector informal de la economía. Los infectados fueron en el 2009 de 23,000.

Según epidemiólogos 10 personas están en posibilidad de contagiar a 14, similar a la gripe común, por lo que muestra un ciclo de vida de temporada. Cuando las autoridades mexicanas reaccionaron la enfermedad ya iba a su término natural.

Coincide la identificación del brote con la visita a nuestro país del mandatario norteamericano Barack Obama, precisamente cuando su Congreso (el norteamericano), declara al Estado mexicano como “Estado fallido”. Le aparente erradicación de la pandemia para mayo del 2009 le da argumentos al presidente de México de “demostrar” que el Estado mexicano no es fallido, controla todo su territorio y muestra de ello es que logra en breve erradicar una pandemia que bien pudo remontar dimensiones internacionales. Todo esto en sí como parte de la parafernalia demagógica del Gobierno mexicano.

DE IZQUIERDA A DERECHA, EL SUFRAGIO DEL PODER

A raíz de las elecciones de 2006, y el inminente peligro de que la izquierda logre el poder federal en México, desde su inicio de administración, una estrategia para debilitarla es crear divisiones entre los militantes y enemistarlo para que no logren una fórmula política basada en alianzas. Recientemente se ve cómo el PRD pierde ante el PRI en el Estado de México con una abierta desventaja en votos.

El desmantelamiento de los movimientos sociales de izquierda es parte de su debilitamiento electoral. Por otra parte, una campaña de desprestigio, como la exhibición tendenciosa de sus elecciones internas y el arribo de los “chuchos”, la creación de la Nueva Izquierda, baja la simpatía política al PRD, principal partido de oposición y de izquierda. Pesa por otra parte el costo moral del fraude de 1988 y de 2006. Muchos votantes vieron con desilusión que el cambio en el país no se puede dar por la vía de la democracia.

Las elecciones intermedias de todo sexenio son muy importantes puesto que lograr una mayoría de curules en el Congreso da la posibilidad de ejercer el presidencialismo. Le confiere gran poder al Ejecutivo nacional lo que le permite promover sus iniciativas sin aspavientos.

En las elecciones de 2009, donde se eligen diputaciones y senadurías federales, algunos locales, delegados del Gobierno del Distrito Federal, y algunos gobernadores, se promovió hasta el voto nulo, ante el enorme abstencionismo esperado.

El michoacanazo, el 26 de mayo de 2009 fueron arrestados 27 funcionarios estatales y municipales, entre los que figuran 10 alcaldes. Se les imputa asociación delictiva con el narcotráfico. Desde luego se trata de un gobierno del PRD con Leonel Godoy. Esto pocas semanas después de transcurridas las elecciones. La izquierda en Michoacán es tan fuerte con términos de comicios como la del Distrito Federal. Con esta operación el desprestigio local y regional de la izquierda, como su desencanto, obedece a poder promover una propuesta política de derecha. Todos los arrestados son liberados en el mes de mayo por desvanecimiento de pruebas, Gobernación pide disculpas por estos atropellos, pero *a palo dado, ni Dios lo quita*.

Fuerzas políticas bajo patrocinio de los grandes grupos empresariales también operan en la configuración del poder en México, destacan empresarios como Lorenzo Servitje, del grupo Bimbo, o el propio Carlos Slim, quienes patrocinan campañas de auténticos testafierros cuyas consignas y misivas obedecen a sus intereses de crecimiento empresarial. En estos grupos están principalmente Televisa y Televisión Azteca, que pretenden mantener la llamada ley televisa y mantenerse con ello como el cuarto poder, antes ocupado por la prensa.

Los partidos políticos de derecha como el PAN o el PVEM resultan verdaderas franquicias de la derecha en el país, concediendo poder a los concesionarios o grandes empresarios. Nada nuevo, desde tiempos de Miguel Alemán la derecha en México opera con abiertos clientelismos. Finalmente el PAN imita las fórmulas de gobierno del viejo PRI. El gobierno del cambio solo saca de la jugada a políticos pero los intereses y los grupos tras el poder son los mismos.

En las elecciones del 2009 el PRI muestra su fortaleza, recuperando terrenos políticos que le ponen como la segunda fuerza política del país, y el montan en la autopista de poder ganar las elecciones federales del 2012. El PAN pierde espacios importantes y admite la necesidad de crear alianzas con otros partidos si es que desea mantenerse en el

poder. Con los “chuchos” a la cabeza del PRD, se hacen viables alianzas entre el PAN y el PRD... increíble y sub-realista!

No obstante el PRD logra mantener el Gobierno del Distrito Federal. Un abstencionismo creciente y votos anulados son un nuevo síntoma del desgaste del sistema político mexicano. Lo que si dejan en claro los comicios del 2009 es que el movimiento lopezobradorista está fuera de la escena política. Su principal logro fue la Delegación de Iztapalapa, con el fenómeno de Juanito, personaje muy influenciado y de débil carácter, manipulable y comprable por la derecha mexicana. La estrategia de Andrés Manuel López Obrador es que una vez lograda la elección en esta delegación Juanito renunciara a su cargo popular dándole cabida a Clara Brugada, pero dadas las elecciones simplemente Juanito no desea dejar su nuevo puesto. Leña para avivar los fuegos que desprestigian a la izquierda y la ponen como conflictiva e inconsistente. En este juego político el Partido del Trabajo hace especial histrionismo.

Todos estos sucesos velan el interés de la derecha en México de cancelar por la vía democrática toda oportunidad para la izquierda del país. El escenario para los comicios del 2012 no es alentador para ésta, desmantelada y desprestigiada trata de alzar vuelo a través de MORENA, movimiento liderado por AMLO, quien se esmera en reunificarla y montarla con la fuerza que presenta en 1988 o en el 2006. Empresa con la que tiene que batirse con los dueños del dinero.

FISCO, ELECCIONES Y EQUIDAD DISTRIBUTIVA

Las actuales administraciones federales desde el año 2000 le apuestan a las políticas de estabilización las cuales se basan en la creación del dinero de forma indizada al crecimiento real de la economía, al menos en lo posible. Con ello se controla de manera muy efectiva la inflación nominal siendo desde entonces menor a un valor anual del 4.5%. Necesariamente los salarios aumentan también indizados a la misma.

En el 2008 con la crisis *subprime*, surgida en los Estados Unidos de América, naciones como China y Brasil resolvieron su contagio de crisis activando sus economías con políticas fiscales basadas en un aumento de gasto público, de acuerdo a las tesis

keynesianas. Su desempeño logra crecimientos anuales de del 10% y del 5% respectivamente, promedio de 2008 – al 2010.

En México, las políticas de contención inflacionaria lograron efectivamente contenerla pero a costa de pérdida de crecimiento. En el mismo periodo la economía mexicana crece a un promedio anual del 3%. Con amplio nivel de desempleo.

La crisis hizo que la recaudación fiscal cayera en el 2008 en 208 mil millones de pesos, el 25% menos de lo recaudado en el 2007. Aparece por ello el Impuesto a Especial a Tasa Única (IETU), que en el fondo trata de rescatar esa pérdida cancelando prácticamente todos los deducibles fiscales de la clase media. Se compensa con sistemáticas alzas en los servicios públicos, especialmente aquellos que más impactan a la clase media del país tales como los cobros de energía eléctrica, la gasolina, el gas como aumento de en precios de los productos básicos (telefonía móvil, cigarrillos, telecomunicaciones, frutas, verduras y la tortilla).

Los causantes cautivos son quienes funcionan como blindaje financiero de las finanzas públicas. Las reformas fiscales desde el 2009 a la fecha se basan en subir el IVA mediante otro impuesto complementario como lo es el 2% adicional. Con estos nuevos ingresos el gobierno sostiene programas asistenciales que llevan un fondo político clientelista, más próximas las elecciones del 2012.

Se quitan subsidios a la energía eléctrica dirigida a consumo en los hogares, al gas, a los combustibles. El impuesto sobre la renta sube del 28% al 30%. Y sobre todo aplicar el IETU. El reparto en el gasto de lo recaudado en el 2009 y 2010 se da principalmente entre el PRI y el PAN al respecto precisamente del gasto en programas sociales en los estados, desde luego a programas asistenciales que son el clientelismo requerido para favorecer las simpatías en los comicios. El presupuesto de SEDESOL llega a ser de 80 mil 476 millones de pesos. EL IVA sube a 16% y el ISR al 30% para sostener la expansión del gasto social. Esto es favorable para ambos partidos en las elecciones del 2010 y en las recientes estatales del 2011, destacando las del Estado de México. Otros estados son Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Gracias a las adecuaciones fiscales del 2009 y 2010, mediante una inflación fiscal el Gobierno recupera sus finanzas ante la recesión de la crisis *subprime*. La reforma fiscal no afecta por otra parte a los paraísos fiscales de los grandes negocios del país, con regímenes fiscales especiales que exonera a los grandes empresarios de pagar impuestos.

Según SHCP y el IFAL los 60 más grandes consorcios del país en el 2009 adeudan al fisco 460 mil millones de pesos. Para ello se les dieron pagos diferidos y créditos por 232 mil millones de pesos, que significan un pago de menos del 4% de impuesto al Estado.

Recientemente se admite que la pobreza en México aumentó, de 90 a 95 millones de pobres, en el 2011 se tiene 52 millones de mexicanos viviendo en la extrema pobreza. En el 2009 86 millones viven en la pobreza alimentaria, de capacidades y patrimonial.

La riqueza en México, como resultado de esta política fiscal ha seguido su antiguo derrotero de concentrarse en los niveles socioeconómicos más altos polarizando la riqueza en el país. El corte de población del 10% más rico concentra el 41.3% de la riqueza, en contraste el 10% de la población de nivel más pobre tiene el 1.2%. En el 2011 los primeros tienen 36 veces más que los segundos. La desigualdad distributiva crece, la clase media es la más perjudicada y ya engruesa las cifras de la pobreza en el país.

DE ADVERSIDAD, SINIESTROS Y DESAVENIENCIAS

Las políticas neoliberales ponen la libertad individual como baluarte supremo de un capitalismo salvaje, que funda el crecimiento en las inercias del mercado, aún admitiendo que opera en condiciones de monopolización y que la libre competencia no es ni pura ni perfecta.

El interés colectivo, el bienestar social, la equidad, la justicia y la calidad de la vida humana son temas “ideologizados”, por lo que el discurso los suple por términos despolitizados tales como asimetrías, efectos colaterales, eficacia del mercado.

La gradual precarización del empleo, el depauperio del salario real, el aumento en el desempleo, y la pérdida gradual de las prestaciones, en especial en materia de seguridad social, explican de gran manera el incremento en el crimen organizado, la violencia y el narcotráfico.

Reformas y privatizaciones que explican los siniestros de las inundaciones en Tabasco (2007) y de aguas negras en el Estado de México y el Distrito Federal (2010). En el primer caso la mala administración de la Presa Peñitas, que para abrir paso a contratos alternativos con particulares que proveyeran de energía eléctrica a plantas de PEMEX en Tabasco, retuvieron el agua para que la hidroeléctrica bajara su ritmo de producción. Pronto los niveles normales de contención en el vaso de agua de la presa rebasan la seguridad de la misma por lo que irresponsablemente abren sus compuertas lo que inunda a muchas poblaciones que quedan en la rivera de cause, especialmente Villahermosa. Desde luego le echaron la culpa a las lluvias de temporal. La CONAGUA como la CFE indicaron que el motivo real es una mala administración de la Presa Peñitas, razón por la cual la ONU niega al país créditos asistenciales ante la tragedia argumentando que ésta pudo evitarse.

La pérdida de supervisión de la Secretaría del Trabajo y Previsión social, dejando en libertad y responsabilidad a los empresarios respecto a sus negocios explica tragedias como las de la mina Pasta de Conchos el 19 de febrero de 2006 en San Juan de Sabinas, en el municipio de Nueva Rosita, Coahuila. Así también la de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora el 04 de junio de 2009.

EL IMSS crea programas subrogados con particulares, da permisos para que se abran planteles de guarderías en respaldo de madres solteras y parejas que trabajan. Muchos de estos sin la debida supervisión y cumplimiento de las normas oficiales para que operen con seguridad. A su vez, resultan negocios lucrativos para la iniciativa privada, en especial cuando se tiene un hacinamiento de menores sin cumplir con las medidas de seguridad y espacio necesarios. El resultado es trágico. Negocios cuyas concesiones obtuvieron todo tipo de empresarios, desde parientes del presitende, expresidentes, funcionarios, ex funcionarios... hasta narcos!

Estas guarderías subrogadas del IMSS son fiscalizadas por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2010, lo que revela que en una mayoría operan fuera de las normas oficiales indicadas para garantizar la seguridad en las mismas. 49 infantes pagarán con sus vidas la laxitud de las autoridades al dejar que operen estos recintos de la negligencia y conveniencia empresarial. La guardería ABC era propiedad de una prima de Margarita Zavala, esposa del presidente de la República, así como parientes del gobernador de Sonora, cuestión por la cual su acusación adquiere la matización penal de “delitos no graves”. La impunidad oficializada o enmascarada por la corrupción.

Estos intereses son encubiertos por el titular del IMSS Daniel Karam y por el encargado de estos programa Juan Molinar Horcasitas, a quien en el 2010 se le premia nombrándolo Secretario de Comunicaciones.

Hasta ahora, los responsables siguen prófugos de la Ley y exentos de penalización alguna, los padres de las víctimas no reciben trato de justicia ante su grave y lamentable pérdida y la nación vive una muestra más de cómo se administra la justicia, o más bien la impunidad en México.

El neoliberalismo exonera de responsabilidades al dejar al libre albedrío y a las fuerzas del mercado no solo aspectos como la equidad, sino de la propia justicia.

FE, FUNDAMENTOS, CONVICCIONES Y CONVENIENCIAS

Hay en la historia de México varios conflictos del gobierno con la Iglesia católica. Los más destacables son la guerra de Reforma (1857 – 1861), la primera guerra cristera (1926 – 1928) y la segunda guerra cristera (1934 – 1938).

El resentimiento de la Iglesia católica y su separación del Estado mexicano reside en la pérdida de privilegios de los que viene gozando durante todo el periodo colonial: el diezmo, control civil de la población mediante los “sagrados sacramentos” y sus censos, donde destacan los bautizos, las comuniones, la confirmación, los matrimonios y las defunciones. Que dan un espectro por edades y condición civil de demografía del

momento. También está la educación, que es durante el mismo periodo una exclusividad de esta Iglesia. Ésta controla incluso la inmigración de extranjeros al país, prohibiendo la residencia definitiva en territorio nacional de extranjeros cuyo origen es de países no católicos.

Es Carlos Salinas de Gortari quien, el 28 de enero de 1992 reforma el artículo 130 constitucional que da derechos en materia de libertad de credo a las distintas Iglesias del país, pero en especial viene a favorecer los intereses de la Iglesia católica. Adquiere personalidad jurídica, las autoridades no intervienen en la vida interna de las asociaciones religiosas, los ministros de culto pueden votar, pero como tales no pueden ser votados, solo que se separen de su ministerio y ejerzan su derecho como ciudadanos. Se supone que se fortalece el estado laico mexicano al excluirles de protagonismo político a las agrupaciones religiosas como a sus ministros de culto. Sin embargo, permite que se abran planteles educativos cuyo propietario es la Iglesia católica, curiosamente no a otras Iglesias, mientras se respete la laicidad en el aula. Finalmente lo que importa es la bonanza de la educación como negocio... negocios que por cierto resultan paraísos fiscales por la serie de deducciones que les privilegian, como es la deducción de impuestos por becarios, por financiamiento a la educación y por ampliación de mobiliario como de inmuebles.

Entre otras fuentes, la educación le da a esta agrupación religiosa ricos ingresos que le permiten mejorar las condiciones de vida tanto de sus miembros como ejercer ciertos servicios (misiones), como actos públicos (procesiones) con fines de fomento religioso y de las convenciones (tales como fiestas patronales).

Su poder es tal que mediante instrumentos de cohesión tales como los medios impresos obsequiados a sus feligreses promueve sus intereses políticos en la población (destaca la edición del panfleto "Desde la fe").

Ataca iniciativas del gobierno mediante la creación de Organizaciones no gubernamentales, de orden civil pero que esconden como encumbran sus intereses. Por caso se tiene el de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ésta promueve la despenalización del aborto, la Iglesia católica patrocina una movilización (igual que lo

hizo en 1848 con los polkos), para sabotearla, y chantajea a los miembros de esta asamblea con la excomuni3n.

El estado de ultraderecha panista, aliado desde sus 3rdenes (1938, con G3mez Mor3n), a la Iglesia cat3lica actúa como gobierno t3tere en complot contra gobiernos que muestran ejercer la laicidad constitucional. Finalmente el aborto es despenalizado en el DF y la PGR como la Comisi3n Nacional de Derechos Humanos impugnan ante la Suprema Corte de Justicia bajo prejuicios basados en la religi3n cat3lica.

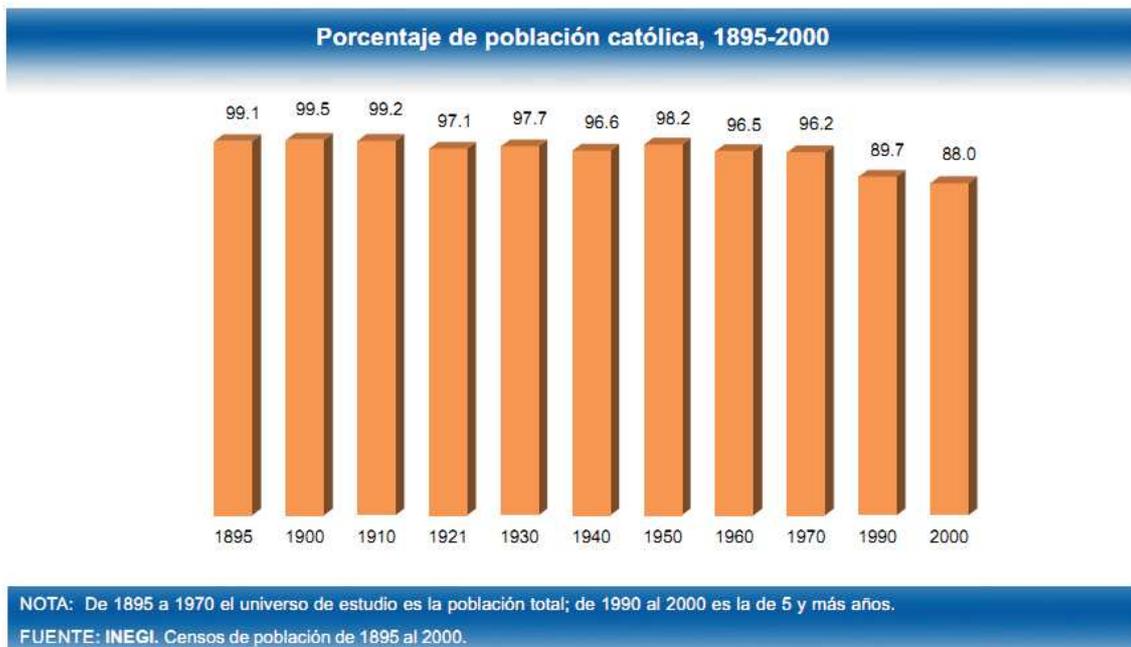
En 1970 el 96.2% de la poblaci3n mexicana es cat3lica. Para el 2010 solo el 85% se mantiene en dicha fe. Otras religiones progresas en su n3mero de creyentes recientemente. Eso muestra que con todo, el poder de esta agrupaci3n religiosa viene en detrimento. No obstante, a3n ejerce su poder. Ante la ratificaci3n de la despenalizaci3n del aborto en el DF, en 17 estados bajo gobiernos panistas, se realizan reformas a sus constituciones estatales donde se admite el juicio del Vaticano donde se afirma que la vida inicia desde la gesti3n.

Las lesiones en materia de derechos humanos en estos estados se materializan como actos jur3dicos contra las mujeres que desean ejercer el aborto. En el estado de Veracruz en 2010 8 mujeres son encarceladas por homicidio, cuyas penas son de 20 a3os de c3rcel. En Guanajuato 6 mujeres son encarceladas por delito similar y cuya pena es de 27 a3os de privaci3n de la libertad.

Cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprueba la ley que legaliza los matrimonios entre homosexuales, una vez m3s la PGR viene a impugnarla, detr3s est3 desde luego la Iglesia cat3lica satanizando este tipo de relaci3n civil. El tema de la adopci3n de hijos por matrimonios homosexuales tiene el mismo derrotero.

Como una iron3a, mientras la Iglesia sataniza el matrimonio gay, el aborto y la adopci3n de hijos por homosexuales, dentro de su s3quito aparecen los sacerdotes pederastas y violadores. Destaca el caso de Marcial Maciel, fundador de la orden de los legionarios de Cristo. Tambi3n est3 el caso del sacerdote Nicol3s Aguilar, entre decenas m3s en todo el pa3s... sin subestimar los casos internacionales citados en cortes tales como las norteamericanas. Lo que obliga al Vaticano a admitir y pedir disculpas por tales abusos.

Finalmente, si hay una rémora en el desarrollo del liberalismo en México, es la Iglesia católica. Irónicamente es la principal aliada actualmente al Estado neoliberal mexicano, que en su seno lleva “el veneno de la serpiente”, pues el liberalismo no se concilia ningún modo con el fundamento conservador de esta agrupación religiosa.



SOBERANÍA, NACIÓN Y DESARROLLO

Las concesiones en materia de uso del suelo como del subsuelo de la industria mineras y de extracción representan el 25% del territorio nacional (considerando litorales). Se deja en claro que ni con Porfirio Díaz se concede a extranjeros tantos derechos al respecto de la explotación de los recursos naturales del país.

La lucha por la Independencia de México no termina en 1821. En realidad hay otras 2 potencias aparte de la española a la que hay que vencer: el Vaticano o de Roma, y la de los Estados Unidos de América, que cuya vecindad natural ha sido para la nación una presencia constante en su injerencia en los asuntos internos nacionales. En ello, en 1848 su invasión al territorio mexicano viene a costarle, aparte de una guerra y costos de indemnización, la pérdida del más del 50 % del territorio nacional. El Plan Guadalupe – Hidalgo aparte condiciona a la soberanía nacional en materia de su propio desarrollo

industrial. Supone la imposición de no poseer un ejército superior a los 60 mil efectivos, como no desarrollar industrias en materia de energía eléctrica tales como generadores o motores eléctricos.

Si bien desde 1989 se inicia en gran escala la privatización del aparato de gobierno mexicano mediante la venta de ya más de 2000 paraestatales, el desmembramiento del Estado mexicano y la venta de su patrimonio a precios irrisorios viene a trasladar la riqueza nacional a unas cuantas manos, alrededor de 20 familias de potentados mexicanos se vienen a beneficiar del “regalo” que les hace el gobierno. Por decir, Carlos Slim adquiere Teléfonos de México a un valor de solo el 4% de su valor real, considerado como valor histórico y no pertinente, contablemente hablando. Aún así no tiene el dinero para adquirir la paraestatal. Para ello el gobierno le presta. Con las ganancias del primer año este bien aventurado empresario paga su adeudo al Estado. Su adquisición, una vez que ingresan las acciones de TELMEX a la subasta de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), le catapulta a ser nada menos que ¡el hombre más rico del mundo!

Con ello, la concepción de una acción de gobierno regido por la norma democrática queda en el pasado. Desde el arribo del salinismo la plutocracia se ha enriquecido agigantadamente. Como oligarquía en el poder opera de inmediato tratando ya no solo de seguir con el desmantelamiento y venta del aparato de gobierno, sino que persigue también enajenar sus voluntades. Compra las candidaturas de todo puesto de elección popular, desde ediles, diputaciones locales, senado y presidencia de la República. Le apuestan a todas las ofertas políticas, del PAN, PRI, PRD, PVEM, PT...

La democracia mexicana es una de las más caras del mundo. Y no por el presupuesto anual que se le concede al IFE, sino por los costos de cabildeo como de proselitismo de la clase política del país. Son precisamente los empresarios que compran las voluntades de los políticos quienes sostienen que hay muchos diputados en el país (500 federales, los locales suman millares), sin considerar senadores, ediles, síndicos, regidores... Desearía adelgazar la “nómina” de sus alienables, para concederse poder y control político en las decisiones públicas.

Si bien España pierde el control de sus colonias en América en el siglo XIX, en adelante la dependencia viene a cambiar de polo, lentamente los Estados Unidos de América, de diferentes formas, mediante la opresión militar, la presión política, financiera, comercial, toman las riendas del desarrollo de la región. Los legítimos anhelos de crecimiento de los latinoamericanos quedan inscritos y en subordinación a las decisiones que se tomen desde Washington, D.C.

El llamado Plan Mérida es un caso actual de subordinación del Estado mexicano al Estado norteamericano. Un acuerdo de G. W. Bush y Felipe Calderón Hinojos realizado en el 2008. El blindaje financiero que requiere México se patentó en créditos que nutran las reservas internacionales del país, las que pueden mantener una paridad cambiaria “estable”, ante abruptas salidas de capital ante el “temor” en los mercados financieros.

El interés norteamericano es en controlar del terrorismo su frontera sur. No desde la línea fronteriza, sino desde todo el territorio nacional. La concesión de dichas líneas de crédito de tipo *stand by*, es cuestionada desde el Senado estadounidense donde se nos declara en el 2009 como Estado fallido, indicando que el gobierno mexicano es incapaz de controlar su territorio, y que la lucha contra el tráfico de armas y el terrorismo no es garantía desde el punto de vista de la ineptitud de las autoridades mexicanas para ejercer el poder sobre su territorio y su población.

La combate al crimen organizado y la supuesta guerra contra el narcotráfico no es más que el ardid que esconde, en el fondo, la acción punitiva y de injerencia norteamericana en combate realmente del terrorismo y el tráfico, no de estupefacientes, sino de armas. ¡La soberanía nacional por los suelos!

Se admite recientemente que el la Agencia federal estadounidense de Inteligencia (FBI), opera conjuntamente con las autoridades mexicanas en espionaje, logística y asesoría en el combate del crimen organizado. Realmente su interés es el control del tráfico de armas, control de la insurgencia mexicana y lucha contra el terrorismo. Los crímenes contra los migrantes, potenciales terroristas desde la óptica estadounidense, explica la gran cantidad de ejecuciones y crímenes a los que son sujetos. Achacados desde luego al crimen organizado en México. Entre las víctimas también están campesinos

pertenecientes al ERPI y al ERP, movimientos guerrilleros de la sierra sur del país, aparte del EZLN, el cual ya está bajo control del gobierno del país.

No solo la soberanía nacional es el tema crítico, sino la guerra fratricida que se encubre tras el supuesto combate al crimen organizado, así como delicados temas en materia de lesa humanidad de la población mexicana, a la que se le ve como delincuente, sospechosa; criminalizada y víctima “colateral” de la subordinación del estado mexicano al estadounidense.

Los migrantes, especialmente aquellos que emigran a la Unión americana, son la población sujeto del deseable control por parte de las autoridades norteamericanas. La militarización del otro lado de la frontera norte del país, leyes anti migrantes de abierta matización racista y discriminatoria, tales como la del Estado de Arizona de 2010, son la respuesta, o bien parte de su política interna de combatir a los potenciales “terroristas” y criminales que ingresan ilegalmente a su territorio.

Desde México son retenidos, las pesquisas no de migrantes mexicanos sino centroamericanos como sudamericanos se patentan en la búsqueda de darles un “trato humanitario”, cuando por décadas se les ha victimado y abusado fuera de toda dimensión de su calidad humana. Tratados como a animales, llegan al caso de retenerles en mazmorras privadas (como con Don Porfirio), esclavizarles, e inclusive ejecutarles. Todo perpetrado por supuestos entes del crimen organizado en el país... pero en ello están efectivos del Ejército mexicano, como lo viene a denunciar Amnistía Internacional desde el 2009.

Las ventas de paraestatales se complementan con la venta de la soberanía nacional. No se combate al supuesto crimen organizado, se combate todo tipo de insurgencia, no solo aquella que atenta contra intereses estadounidenses, sino del propio Estado mexicano. El pueblo de México, como los migrantes que cruzan por el territorio nacional, criminalizado, victimado, es el “daño colateral” de toda esta farsa encubierta en el supuesto crimen contra el narcotráfico.

La droga es una estrategia de penetración e intervención del gobierno norteamericano en territorios del desarrollo periférico. Desde las guerras del opio en el siglo XIX, el

colonialismo decimonónico en Asia y en África, y en la actualidad en América latina, especialmente en México.

Ingresa la Inversión Extranjera Directa, y con ella las formas subrepticias coludidas de los intereses del imperialismo norteamericano con la oligarquía nacional, quienes terminan por arriendas al propio gobierno del país.

De forma encubierta, so pretexto de la droga, combaten a naciones contrarias a los norteamericanos tales como son los talibanes, Iraq, o Nicaragua y el Salvador. O bien, para dar respaldo a sus aliados en guerra contra sus gobiernos, como en Vietnam, en Corea, en Afganistán, recientemente en naciones árabes como Libia.

Ahora, el dinero de la droga es la cuarta fuente de divisas en México, y aporta al menos una quinta parte de los ingresos de Hacienda mediante el lavado de dinero. Razón que explica porqué no se combate este rubro y solo el supuesto tráfico, el no controlado por el gobierno mexicano porque está el cartel de Tijuana que le administra “el negocio” al gobierno del país (Chapo Guzmán).

El dinero de la droga paga campañas de políticos, nutre las arcas de los bancos, mexicanos como extranjeros, y sostiene en gran medida las finanzas públicas. Prescindir de tan rico recurso no es viable para una nación en vías de desarrollo. Su supuesto combate es todo un teatro armado que finge, engaña, hace comedia como arma tragedias de la realidad socio política del país. Es la “la santa providencia” ante los grandes males nacionales... panacea universal, salva a los gobiernos de caídas abruptas efecto de las malas administraciones.

CONCLUSIONES.

Igual que en la época del porfirismo, el liberalismo finalmente vino a revivir la oligarquía plutonómica en la economía mexicana. El liberalismo económico basado en la apertura económica, la desregulación y el desmantelamiento del Estado le deja manos libres a los grandes empresarios del país como del extranjero para explotar los recursos de la nación, y termina vía privatizaciones enajenándose el patrimonio nacional (en gran

parte no solo por la adquisición de los recursos naturales sino también mediante la compra de más de dos mil paraestatales).

La fractura de la sociedad mexicana y sus nuevas disrupciones se debe al término del pacto social logrado durante la revolución mexicana en materia social, económica y política. El Estado mexicano desde 1982 deja, de forma paulatina, de ser un estado del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, pero sobre todo deja de ser democrático.

La violencia se viene desatando desde los años 70 del siglo XX con movimientos populares liderados por Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, principalmente. Movimientos que actualmente enarbolan el ERP y el ERPI, así también otros nuevos tales como el EZLN, de hechura más reciente, pero de abierta beligerancia a la desigualdad social. SEDENA declara que en el país operan al menos 39 grupos sediciosos.

So pretexto del combate al crimen organizado y la guerra contra el narcotráfico, el programa norteamericano de combate al terrorismo y el control del tráfico de armas en México ya cuesta a la nación más de 40 mil ejecuciones del 2006 a 2011. Igual que si existiera una guerra civil.

El Estado de exclusión gobierna solo para unas cuantas familiar mexicanas, todas ellas pertenecientes a la oligarquía plutocrática de grandes empresarios, mexicanos como extranjeros.

El desempleo sigue en niveles socialmente no admisibles y por tanto el éxodo de nacionales al extranjero indica que 1 de cada 7 mexicanos ya reside actualmente fuera del territorio nacional.

El crecimiento anual del PIB no logra repuntar a al menos el 5% que es necesario para crear el millón de empleos anuales requeridos para abatir realmente el desempleo existente.

La estabilidad lograda del 2000 al 2006, en adelante se tambalea ante la vulnerabilidad de una economía que no logra cimentar con bases más autónomas su fortaleza,

especialmente ante crisis tales como la *subprime* de 2008 surgida en la Unión Americana.

El sueño panista de catapultar la economía nacional del décimo tercer lugar de las naciones más desarrolladas del mundo al quinto termina por ser una quimera más, parte de la demagogia neoliberal del grupo político de ultraderecha.

La democracia desde el inicio de la presente administración es el principal costo que paga la nación mexicana, los fraudes se siguen cometiendo en comicios posteriores tanto en elecciones locales como nacionales. Como con el PRI es parte del sistema de gobierno.

La seguridad, la justicia, la impunidad y sobre todo, la paz social es otro costo más que facturan los mexicanos dada la violencia y la inseguridad desatada por el poder ejecutivo al llevar al ejército a las calles, que no es otra cosa que una declaración de guerra al pueblo de México por parte de la oligarquía de empresarios potentados que se adueñan del país. Es el garrote, tal como lo afirma Carlos Marx en su célebre texto “El manifiesto comunista”.

El combate al crimen organizado es cuestionable ante la cada vez más evidente protección al cártel de Tijuana (controlado por el “Chapo Guzmán”), el injustificable costo de vidas de inocentes como efecto colateral de esta absurda guerra, el solapamiento desde la Secretaría de Hacienda del lavado de dinero, el mantener la protección política a muchos de estos capos como la extorción de bancos a sus acreditados y malos manejos de carteras perdidas, que en el fondo son recursos que se saldan abusando del fondo bancario para protección al ahorro y del cohecho a ciudadanos.

Los derechos humanos por los suelos en todo gobierno, en toda administración y en todo el territorio nacional, cuestión que se viene agravando desde el inicio del neoliberalismo en 1982.

La censura y represión a periodistas pone al país como aquella donde es más peligroso ejercer la profesión del periodismo.

La criminalización de la insurgencia, la protesta y la denuncia desde gobernación es patrocinada.

La izquierda del país, desde la derecha es desmantelada, por caso la imposición de “los chuchos” en el PRD.

Los movimientos sociales promovidos por los trabajadores de México son reprimidos y difamados por los medios, por caso la experiencia en la extinción de la paraestatal de Luz y Fuerza del Centro, así como la huelga de los mineros y el boicot contra su sindicato.

En materia de Salud, pues se tuvo recientemente una epidemia que es la influenza humana y recientemente se expresa la vulnerabilidad del sistema de salud mexicano ante el brote de varios casos de sarampión en varias partes del territorio nacional.

La seguridad social con las reformas a las normas en materia de seguridad social, en especial referente a la ley orgánica del IMSS y del ISSSTE restan prestaciones a los trabajadores mexicanos, al menos a los de reciente empleo, que se trata de jóvenes y de las nuevas generaciones de mexicanos. El Seguro Popular no cubre en diversidad y calidad de servicios lo que atiende el IMSS, pero sobre todo es un seguro que no paga necesariamente la parte patronal sino el propio trabajador, o ciudadano al margen de un contrato formal. De hecho el empleo informal como desprovisto de derechos laborales como de prestaciones es parte de la flexibilidad laboral, tan promovida por el Gobierno.

Los servicios públicos que son parte de la canasta básica son precisamente los que más suben: luz, gasolinas, diesel, gas, agua potable, principalmente. Sustento de las finanzas públicas consideradas “sanas” desde el punto de vista de la contabilidad nacional, pero insanas desde el punto de vista de la desigualdad social, pues resulta que quienes pagan impuestos y a quienes se aplica la inflación es al pueblo trabajador y no a los grandes empresarios, quienes gozan de un trato especial y exonerado de contribuciones.

El poder adquisitivo de los asalariados sigue su depauperio tradicional observado desde 1965. La estrategia de las familias mexicanas es involucra a más miembros a la vida

laboral, lo que significa que abandonan prematuramente sus estudios o bien postergan parte de la realización de anhelos en materia de formación.

El régimen se mantiene mediante el fraude electoral desde 1988, el engaño y el discurso demagógico y tramposo, la falsedad sistemática, la existencia de programas sociales realmente fantasmas, la ingobernabilidad que le pone como Estado fallido, la represión, el autoritarismo, la autocracia y el fascismo militarizado, la violencia como fórmula de control, el genocidio fratricida, la deshonestidad de los gobernantes quienes reciben del clientelismo grandes concesiones, incluso dádivas económicas, el mal gobierno, los sueldos a funcionarios pagados como del primer mundo en una nación que aún sufre los espectros del atraso, la insensibilidad ante la pobreza que se extrema y generaliza cada día más, el doble discurso, la doble moral, el mocherismo y servilismo a la Iglesia católica, el clientelismo al estilo del viejo PRI, y la venta de la patria son las características de los gobierno neoliberales mexicanos.

Ante la desilusión del pueblo mexicano de sus gobernantes panistas, la oligarquía nacional promueve el regreso del PRI, con otros actores, pero con el mismo histrionismo. Debe por ello replantearse un nuevo pacto nacional entre trabajadores y empresarios del país, conciliando intereses de ambos bandos en un proyecto que si bien ahora es sostenible, bajo coerción, no logra la sustentabilidad social, política, económica, cultural y ecológica. Para ello se debe abandonar la ética liberal, neoliberal, que desde el siglo XIX tanto daño ha hecho al pueblo de México. La vialidad, desde la revolución mexicana es necesariamente un acuerdo de corte social demócrata, laico y especialmente basado en una auténtica democracia: el poder del pueblo.

FUENTES:

Barajas Durán, Rafael (2010) *Felipe de Jesús el pequeño*. México. Ed. Planeta. P. 261.

Buscaglia, Eduardo y Roemer, Andrés (2006) *Terrorismo y delincuencia organizada (un enfoque de derecho y economía)*. Instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM. México.

DOF (28 enero 1992) Poder Legislativo. México.

Hernández, Anabel

- (2005) *La familia presidencial. El gobierno del cambio bajo sospecha de corrupción*. Editorial Grijalbo. México.
- (2006) *Fin de fiesta en Los Pinos*. Editorial Grijalbo. México.
- (2007) *Los cómplices del presidente*. Editorial Grijalbo. México
- (2010) *Los Señores del Narco*. Editorial Grijalbo. México.

INEGI (2005) *La diversidad religiosa en México*. México. P. 192.

Reveles, José (2010) *El cártel incómodo*. Grijalbo. México.